

REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA BIODIVERSIDAD y culturas

Primavera 2019
Núm. 34

FRUTA CON
JUSTICIA SOCIAL

SIN MOLINOS
NO HAY SOBERANÍA

POLÍTICAS ALIMENTARIAS
MUNICIPALES:
RESULTADOS Y REFLEXIONES



LA REVISTA ES UN ESPACIO COLECTIVO INTEGRADO POR:

- Amigos de la Tierra
- Campo Adentro
- Cátedra de Agroecología Universidad de Vic
- Catedra Tierra Ciudadana Universitat Politècnica de València
- CERAI
- COCEDER
- Ecologistas en Acción
- Entrepueblos
- Fundación Entretantos
- Garúa
- GRAIN
- Grupo de Investigación en Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización (ARAG-UAB) Universitat Autònoma de Barcelona

- Grupo de Estudios Juan Díaz del Moral
- Justicia Alimentaria Global
- Iniciativa Comunes
- Lonxanet
- Associació de consumidors i productors La Magrana Vallesana
- Mundubat
- Observatorio para una Cultura del Territorio
- OSALA
- Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
- Postgrau de Dinamització Local Agroecològica Universitat Autònoma de Barcelona
- Red de Semillas

- Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras
- Sindicato Labrego Galego
- Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
- Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato

Estamos en un proceso interno de cambios con el fin de visibilizar mejor las alianzas que en estos años de trayectoria hemos ido construyendo. En los próximos números veréis ampliarse esta lista.

Si quieres que tu colectivo se sume, contáctanos.



Primavera 2019 Núm.34

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas es una publicación para el Estado español de información, debate y reflexión sobre temáticas rurales bajo una óptica política de soberanía alimentaria. Un instrumento de pensamiento crítico hecho por las manos y para las manos de las gentes que integran los movimientos que defienden un mundo rural vivo.

Ilustración de portada: Carolina Cancanilla es el seudónimo de Carolina Alcázar, una ilustradora andaluza que reside en Edimburgo desde donde trabaja para medios de distintos países. Su trabajo se centra en la comunicación de conceptos a través de la ilustración, con un estilo pictórico lleno de colores cálidos y utilizando herramientas tanto digitales como tradicionales. Principalmente, trabaja en el campo de la ilustración editorial ilustrando artículos y portadas para diferentes periódicos y revistas. Ha trabajado para diferentes medios como *La Maleta de Portbou*, *Diario Sur*, la revista *Savia*, *Principia Magazine*, *Hollywood Magazine*, *BBC History*, entre otros. Además, ha trabajado como ilustradora y diseñadora para proyectos independientes y festivales como *The Edinburgh Meadows Festival*, *Girls Rock School Edinburgh*, *Anti-repression forum* y *The Autonomous Centre of Edinburgh*.

Fotografías: Murales de Cestola na Cachola. En gallego, cestola es una manera coloquial de decir cesta y cachola es cabeza. Se trata de una cooperativa donde se autoemplea un equipo de tres personas: Xoana Almar y Miguel Peralta hacen murales, cuadros e ilustraciones, y Raquel Doallo trabaja y milita en el campo de la economía social y solidaria, la educación para el desarrollo y la cooperación internacional. Defienden poder obtener un salario digno a través de la comercialización de sus productos y servicios. Cestola na Cachola nace con interés en contribuir al cambio del modelo económico actual, desde una sociedad consciente y organizada. Contra el individualismo, por la unión y el trabajo en red. Por eso forman parte de REAS Galiza, EspazoCoop, AGPI y AIS O Peto.

www.cestolanacachola.org

Agradecimientos: Además de a las personas que han contribuido con contenidos específicos ya mencionadas en las autorías y en las fuentes, queremos agradecer a quienes nos han ayudado a hacer posible este número sugiriendo contenidos, contrastando información, facilitándonos contactos o simplemente ayudándonos a aterrizarla tal y como ha quedado: Lucía López Marco, Manuel Redondo Arandilla (Red Terrae), José Cofreces, Conchi Mogo, Amal El Mohammadiane Tarbift, Juan Clemente Abad, Pablo Sáez, José Ramón Duato, COAG CV, Carlos Taibo, Henk Renting, Red de Ciudades por la Agroecología, Daniel González, José Manuel Raymundo (Red Tz'ikin), Quim Muntané, Piero Carucci, Sarai Fariñas, Francisco José Garrido Bellver, Josep Espluga, Vero Hernández-Jiménez.

Os invitamos a que os comuniquéis con el equipo redactor (info@soberaniaalimentaria.info) y nos enviéis vuestras experiencias, sugerencias y comentarios así como aportaciones gráficas para próximos números. Los artículos son responsabilidad de quienes los firman. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citarais la fuente.

Esta publicación ha contado con el apoyo financiero de:

Ajuntament de Barcelona - Justícia Global i Cooperació Internacional
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Generalitat Valenciana - Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació



COMITÉ EDITORIAL
Paul Nicholson
Jerónimo Aguado Martínez
Henk Hobbelink
Belén Verdugo Martín
Marta G. Rivera Ferre
Fernando Fernández Such
Carlos Vicente
Blanca Ruibal
Clara Grieria
Mariola Olcina
Leticia Toledo
Laura Arroyo
francO Llobera

EQUIPO EDITOR
Gustavo Duch
(gustavo@soberaniaalimentaria.info)
Patricia Dopazo
Carles Soler

CORRECCIÓN
Eva CM

ARTE Y MAQUETACIÓN
www.mareavacia.com

DIRECCIÓN POSTAL:
c/ Girona 25, principal
08010 Barcelona

WWW.SOBERANIAALIMENTARIA.INFO

facebook.com/revistasoberaniaalimentaria
 @revistaSABC

Depósito Legal B-13957-2010
ISSN 2013-7567

EDITORIAL	
Construcción colectiva, ruptura y desobediencia.....	4
AMASANDO LA REALIDAD	
Construir desde abajo	
David Algarra.....	6
La España llena	
Gustavo Duch.....	10
Conversatorio. «Niñas y niños corriendo por la calle»	
Revista SABC.....	13
Movimientos sociales y ayuntamientos	
Nerea Morán Alonso, Isabel Vara Sánchez, Lidia García García, David Gallar Hernández y Ana Moragues Faus.....	19
DE UN VISTAZO Y MUCHAS ARISTAS	
Vistazo: Experiencias inspiradoras.....	23
Breves.....	28
EN PIE DE ESPIGA	
La Universidad. Mucho por labrar y por cosechar	
Artículo colectivo.....	29
Fruta con justicia social	
Gemma Casal Fité.....	32
El audiovisual como herramienta de lucha	
Red Tz'ikin.....	36
VISITAS DE CAMPO	
Sin molinos no hay soberanía	
Arrate Corres Velasco.....	39
Citricultura valenciana ¿crisis coyuntural o fin de ciclo?	
Juan Piqueras Haba.....	43
PALABRA DE CAMPO	
El acto político de comer	
Jordi García.....	48
Ganar cada pueblo	
Alberto Cañedo.....	50



Construcción colectiva, ruptura y desobediencia

Hace poco más de cuatro años que los movimientos sociales gestaban la «Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios». Una propuesta política acertada, puesto que en mayo de 2015, se construyeron nuevos gobiernos que apostaban por cierta transformación y ruptura de la política municipal. Fue un momento de euforia, de sentir que había una oportunidad de cambio que ampliaría el autogobierno y la participación dentro y fuera de las actuales instituciones, que podía y debía apoyar la transición desde un modelo de agricultura capitalista y alimentación globalizada hacia la soberanía alimentaria, revalorizando los criterios sociales, ambientales y de proximidad. Y cuatro años después, ¿dónde estamos? Es el momento de hacer una valoración crítica de lo que se ha conseguido para poder avanzar hacia ese municipalismo transformador.

Las estructuras y dinámicas locales no son ajenas al modelo neoliberal. La realidad municipal está condicionada por jerarquías, formas de toma de decisiones y reglamentos muy consolidados y pensados para impedir que se puedan transformar. Son estructuras que, como explica el artículo introductorio de David Algarra, favorecen un determinado modelo *democrático* y, por extensión, un sistema alimentario concreto. Este modelo de democracia representativa obliga a trabajar en ciclos de cuatro años, un tiempo que se queda corto para abordar cambios de fondo. Puede, incluso, que hayamos sido algo inconsistentes al hacer propuestas municipales sin tener demasiado conocimiento de este funcionamiento y de las entrañas de los ayuntamientos. Hemos dedicado mucho tiempo a modificar normativas, ordenanzas, pliegos..., pero lo hemos hecho desde un posicionamiento algo sumiso. ¿Cuántos ayuntamientos han desobedecido la ley Montoro? ¿Cuántos han sido capaces de enfrentarse al poder agroalimentario a través de sus puestos de decisión, por ejemplo, en los mercados de abastos

conocidos como *mercás*? ¿Qué respaldo han recibido aquellos gobiernos locales que sí se han atrevido? En este número, se da respuesta a alguna de estas preguntas a partir del análisis de los avances en algunas ciudades del Estado; pero, en cualquier caso, parece claro que trabajar para la soberanía alimentaria tiene que suponer, tarde o temprano, desobedecer e impugnar el orden establecido.

Aún somos una minoría. Y lo tenemos que verbalizar. La alimentación, a pesar de ser una necesidad y un derecho, no aparece en la agenda política de la gran mayoría de los municipios. Basta con revisar el presupuesto que se ha dedicado a la construcción de sistemas alimentarios. ¿Cuántos ayuntamientos han creado una concejalía o comisión municipal para abordar de forma transversal las políticas alimentarias? No hemos de conformarnos con las migajas, debemos exigir el pan entero.

Siendo todo bien complicado, pensamos que tenemos que ser más autoexigentes. La prueba la tenemos en que muchos ayuntamientos se han apoderado del relato de los movimientos sociales sobre la alimentación, pero han transformado poco o nada con sus hechos y de forma sutil han ido vaciando de contenido político algunas apuestas transformadoras para convertirlas en algo ambiguo. Hemos pasado de defender la soberanía alimentaria a defender simplemente «sistemas alimentarios sostenibles».

Analizar estas nuevas políticas obliga a salir de las zonas de confort para evitar construir hojas de ruta desde posiciones privilegiadas. No es lo mismo hablar de políticas alimentarias desde la comodidad urbana que hacerlo desde la realidad campesina o de quien trabaja como temporera. ¿De qué manera se han visibilizado estas realidades en las políticas alimentarias que se han desarrollado? Las agendas y proyectos que se ponen en marcha siguen teniendo una visión excesivamente urbanocéntrica donde la única prioridad es alimentar a las ciudades ahora con productos



Mural realizado en 2017 por Miguel Peralta junto al colectivo Lenzos de Terra e Cal en Castro Caldelas (Ourense), con la técnica del esgrafiado, una capa de cal y arena con un pigmento y una segunda capa, en la cual se dibuja y rasca como en un grabado antes de que esté seca. Foto: Cestola na Cachola

ecológicos, pero ¿la prioridad no sería una alimentación urbana que favoreciera al territorio rural? ¿Nos están marcando la agenda las modas que solo tienen en cuenta al individuo (eco, friendly, diseño...)? ¿Nos estamos olvidando de que las políticas alimentarias no solo están para mejorar la alimentación, sino también para combatir las injusticias? Las respuestas afirmativas suponen beneficiar a las clases acomodadas y cronificar la precariedad de la gente campesina, de las trabajadoras de mataderos, de las reponedoras de las grandes superficies, las cuidadoras, etc. Por todo ello, desde esta revista nos ha parecido fundamental abordar las políticas alimentarias de los pueblos, a través de algunas experiencias y del conversatorio con tres responsables municipales.

No son críticas sin más; pensemos que mientras hablamos de democracia participativa, de procesos de cambio, de empoderamiento, hay quienes siguen haciendo su trabajo sin

contemplaciones. Los *lobbies* agroalimentarios no se sienten amenazados por los gobiernos, no necesitan de consejos alimentarios municipales, ya tienen sus espacios de poder y decisión que, por cierto, no han pasado por los plenos municipales.

Todo esto nos obliga a preguntarnos desde dónde se puede hacer más por la soberanía alimentaria, ¿desde los movimientos sociales o desde los ayuntamientos? Está claro que los dos espacios son fundamentales, pero también es cierto que, en algunos territorios, los movimientos por la soberanía alimentaria han perdido capacidad de incidencia puesto que la apuesta municipalista ha acaparado su tiempo y sus recursos. Reactivar su capacidad de movilización, de interpelar a la sociedad, de visibilizar y motivar la multiplicación de proyectos que abran camino y de transformar desde abajo también es trabajar por un municipalismo transformador.



David Algarra

Las elecciones municipales del 2015 significaron la entrada de nuevas formaciones, cuyo origen se debe especialmente a la crisis económica del 2007 y a la irrupción del 15M. Son los llamados gobiernos del cambio o del municipalismo transformador.

A pocos meses de nuevas elecciones, el resultado, más allá de los discursos y de lo simbólico, parece insuficiente. En un momento en el que el binomio Estado-capital ha asimilado y ha integrado en su maquinaria tanto a ideologías de derecha como de izquierda, se hace necesaria una reflexión: para ejercer la libertad y mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de una comunidad humana, ¿es suficiente con elegir cada cuatro años un partido, manteniendo las mismas estructuras y dinámicas sociales, políticas y económicas o hay que replantearse radicalmente el modelo?

Lo que se suele denominar como democracia representativa o parlamentaria tiene su origen en las revoluciones liberales, hace aproximadamente dos siglos. Pero tras la creencia de que esta gran transformación fue responsabilidad del desarrollo de las fuerzas productivas y de una nueva clase burguesa que expulsó a la aristocracia del poder con ayuda de las clases populares, la realidad es mucho más compleja.

Hay que retrotraerse al nacimiento de los Estados modernos y a la acumulación originaria de tierras y fuerza de trabajo, propiciada por los Estados en su pugna por el dominio de más y más territorios. Según el filósofo y escritor Robert Kurtz, el origen del mercado capitalista debe mucho a la revolución militar que se inició a finales del siglo xv, dando paso al Renacimiento: «No fue la fuerza productiva sino, por el contrario, una

contundente fuerza destructiva la que abrió el camino a la modernización». La producción y movilización de nuevos sistemas de armamento, como los cañones de hierro colado y los grandes barcos de guerra, ya no eran posibles desde estructuras locales y descentralizadas y requirieron de una organización nueva de la sociedad. Este complejo militar requería de una economía de guerra permanente y compleja que dependía de la mediación del dinero y que ya no podía sustentarse en la reproducción agraria local. Son los inicios de los cercamientos de tierras de particulares para evitar las prácticas comunales y de la expropiación de bienes que hasta aquel momento estaban fuera del mercado, como eran los bienes del común. Todo ello fue apoyado y regulado por los Estados modernos, creándose una nueva clase de los negocios que tenía como principal cliente al Estado. En Europa, la economía de guerra forzó el sistema de economía de mercado y llevó a un incremento de los tributos del 2000 % entre los siglos xvi y xviii.

El derecho de propiedad

En el Estado español, la revolución liberal o de propietarios, como la llamaba el historiador Josep Fontana, se produjo en una comunión de intereses entre la nobleza o clase militar y la clase de los negocios. El fundamento del Estado-nación, que creó sus bases en las Cortes de Cádiz, es lo que denominaban el «sagrado derecho de propiedad», como se puede contrastar revisando los decretos del periodo 1810-1814. Los poco más de trescientos diputados de las Cortes provenían de profesiones liberales o eran funcionarios civiles y militares, y un tercio eran eclesiásticos. Todos los diputados eran varones y las pocas alusiones a las mujeres se hicieron desde una visión patriarcal y androcéntrica, defendiendo como algo natural e indiscutible que las mujeres estuvieran desprovistas del derecho a participar en política, como en la intervención del diputado Diego Muñoz-Torrero.

Muy al contrario de lo que se suele creer, la abolición de los señoríos jurisdiccionales supuso grandes ventajas para la nobleza, ya que el Estado a cambio les permitió conservar la propiedad del solar y se sustituyeron las relaciones de vasallaje por contratos entre particulares. Como han demostrado los historiadores Ramon Garrabou, Enric Vicedo y Enric Tello: «La adaptación de estos linajes de nobles y hacendados al nuevo

sistema capitalista fue muy rápida e indolora. Convertirse en capitalistas significaba para ellos desarrollar formas aún más eficaces de explotar el trabajo ajeno». El Estado-nación es en esencia el ejército y la mayoría de organizaciones de la modernidad, como la escuela, el partido político, la policía, la justicia, la corporación empresarial o la prisión, siguen este mismo modelo castrense, de cadena de mando de arriba abajo.

El derecho de propiedad decretado en Cádiz estaba basado en una lógica individualista que, entre otras cosas, impedía las prácticas comunales y era causa de indignación y revueltas entre las clases populares, que a su vez para poder subsistir se veían obligadas al éxodo rural y a proletariarse en las fábricas para «ganar dinero» y pagar sus impuestos al Estado. Para asegurar el pago de los tributos, el Estado liberal tuvo que crear un aparato administrativo y policial descomunal. Inicialmente, los únicos reconocidos como verdaderos ciudadanos eran los varones propietarios, a partir de una renta anual de 6000 reales o que pagasen una contribución de entre 200 y 400 reales. Ellos eran los que podían formar parte de las milicias nacionales (policía), los que podían votar según el sistema electoral del sufragio censitario, que suponía un cuerpo electoral del 0,15 % de la población española, los que podían participar en política y los que tenían más posibilidades de adquirir bienes desamortizados en las subastas.

“ Ante la crisis multidimensional se hace urgente revisar si realmente no tenemos nada que aprender de otras culturas supuestamente menos desarrolladas tecnológicamente. ”



Mural realizado en 2016 por Xoana Almar y Miguel Peralta en Vigo. Foto: Cestola na Cachola

Progreso y partidos

Otro de los aspectos de las estructuras de pensamiento dominantes que tiene origen en el liberalismo, además del individualismo, es la fe en la teoría del progreso, compartida también por la izquierda. Se trata de un concepto lineal del tiempo que es considerado como la verdadera «religión de la civilización occidental», que tiene una mirada de desdén y de autosuficiencia ante el pasado y que básicamente defiende que los avances de la ciencia y la técnica van también a favor del progreso social: «siempre se sabrá más, por tanto, siempre todo mejorará». Hoy día, ante la crisis multidimensional, especialmente el desastre medioambiental y la pérdida de valores humanos, se hace urgente revisar si realmente no tenemos nada que aprender de otras culturas supuestamente menos desarrolladas tecnológicamente.

En la vertiente política, la revolución liberal se basó en la misma lógica individualista que la del mercado, que, como decía Alexis Tocqueville, lleva a la impotencia del individuo para intervenir de forma significativa en los asuntos públicos. La suma de egoísmos que conduce al bienestar económico a través de una mano invisible –el principio de un individuo un voto, sin consensos desde abajo ni la atención puesta en las necesidades del vecino ni en la vida en común, cada quien desplazado a sus intereses particulares– es el fundamento de la democracia liberal. Intereses particulares que se armonizan a través de partidos políticos jerarquizados y cerrados que van

intercambiándose en el gobierno de las diferentes instituciones del Estado y que, como dijo la filósofa Simone Weil, son máquinas de fabricar pasión colectiva cuya única finalidad es su propio crecimiento sin límite. Montesquieu, uno de los precursores del liberalismo, afirmó en *El Espíritu de las leyes* que «la gran ventaja que ofrecen los representantes es que son capaces de discutir los asuntos. El pueblo no es del todo idóneo para esto, lo que constituye uno de los mayores inconvenientes de la democracia». No fue hasta años más tarde, en un alarde de trilerismo político, que se atrevieron a denominar democracia al sistema representativo. Sin olvidar que el gobierno de los partidos políticos no es el todo; existen otros poderes, no escogidos en las urnas, que toman decisiones, como el alto funcionariado civil y militar, las élites económicas, intelectuales, etc. Pero, sean escogidos o no en las urnas, ni unos ni otros son responsables de sus decisiones ante la población. En el sistema representativo, las personas escogidas no están sometidas al mandato imperativo, es decir, no están obligadas a cumplir sus promesas electorales ni el pueblo puede revocar su mandato antes de las siguientes elecciones; mientras que las portavocías de los antiguos concejos que participaban en asambleas supralocales sí que estaban sometidas a este principio político.

En el sistema representativo liberal se ha producido un fenómeno equivalente al de la concentración del capital. Según nos indica Takis Fotopoulos en su libro *Crisis multidimensional y*

Los ayuntamientos. Un Estado en pequeño

En el plano local, el decreto del 23 de mayo de 1812 establecía la formación de los ayuntamientos constitucionales que arrebataron la titularidad de los comunales a la población, obviando a su vez el concejo abierto, la asamblea general del común. Los ayuntamientos liberales se crean según un modelo centralista de Estado, intensificando la separación entre las instituciones del pueblo [alcalde, regidores y funcionarios] y la comunidad de vecinas. Al igual que en las altas instituciones del Estado, la administración local incluye un alto funcionariado, cuyo cargo más elevado es la secretaría municipal, que desde su establecimiento por el artículo 320 de la Constitución de Cádiz fue clave en la imposición de la uniformidad institucional como vínculo administrativo de arriba abajo entre el poder central y el poder local, y supuso una pérdida de autonomía local basada en la costumbre.

democracia inclusiva: «La concentración de poder político ha sido el complemento funcional de la concentración del poder económico. Si la dinámica de crecer o morir de la economía de mercado ha dado lugar a la actual concentración del poder económico, la dinámica de la democracia representativa ha conducido a una correlativa concentración del poder político. Así, la concentración de poder político en manos de los parlamentarios en la modernidad liberal ha conducido a un grado de concentración aún más grande en manos de los gobiernos y el liderazgo de los partidos de masas en la modernidad estatista, a costa de los parlamentos».

Cuestionar el modelo desde la raíz

En esencia, estas estructuras y dinámicas de funcionamiento se han mantenido desde sus orígenes y se hace difícil creer que, sin un cambio profundo en la raíz del sistema, partidos con supuestas nuevas políticas puedan mejorar radicalmente la vida de la ciudadanía. Para empezar, hacen falta organizaciones que se atrevan a cuestionar la centralidad del trabajo asalariado y la concentración de los medios de producción en pocas manos, que es la base del capitalismo. Hoy los partidos de izquierda se diferencian cada vez menos de los partidos de derecha porque básicamente han renunciado a poner en tela de juicio las bases del modelo económico, que es lo que lleva a la precariedad y a que las necesidades más básicas no estén garantizadas para un porcentaje creciente de la población, mientras que los partidos conservadores y liberales han asumido también parte de los discursos de la izquierda

posmoderna y las políticas de identidad. Esta es la causa principal del ascenso de la extrema derecha que, sin cuestionarse tampoco el capitalismo, promete a la clase trabajadora un reparto de las ayudas estatales y del empleo que priorice a la población autóctona, responsabilizando a las personas inmigrantes pobres de las desgracias de los penúltimos.

Pero sobre todo es necesario cuestionarse el modelo político, por lo menos en el plano municipal, que es lo que queda de aquellas comunidades que se regían por el concejo abierto. El pueblo tendría que participar directamente en su gobierno mediante la asamblea del común. Para ello tendrían que darse las condiciones adecuadas: por ejemplo, que los barrios de las ciudades y los núcleos de población no tuvieran una concentración poblacional como la actual, que dificulta la democracia directa y la creación de tejido social. Otros aspectos a considerar son la preparación individual desde la infancia como sujetos prepolíticos y comunitarios para participar en la vida pública –para lo cual se debería modificar el sistema educativo– y la reducción de la jornada laboral para poder dedicar el tiempo necesario a los asuntos del común. Sería un primer paso para construir desde abajo, desde la comunidad real, la comunidad arraigada al territorio, con conocimientos del mismo, que pudiera decidir sobre sus bienes comunes y con abundantes vínculos horizontales entre sus partes para la ayuda mutua y la solidaridad.

David Algarra

Autor del libro *El común catalán.*

La historia de los que no salen en la historia.

info@elcomu.cat

Gustavo Duch

La España llena

SOBRE LA RADICAL INSOSTENIBILIDAD DE LAS CIUDADES

Si Turgot, padre de la fisiocracia, echara cuentas de nuestro mundo actual, le saldrían altamente deficitarias. Para esta corriente de pensamiento que consideraba que «el agricultor es la única persona cuyo trabajo produce algo más que el salario», un mundo con más de la mitad de las personas viviendo en núcleos urbanos donde la agricultura es solo residual significaría un mundo improductivo o, más exactamente, un mundo que gasta más de lo que produce.

Esta mirada, la del «gobierno de la naturaleza», fue la precursora de los actuales análisis empleados para determinar la sostenibilidad ambiental, que demuestran fácilmente que las ciudades, las grandes urbes, son insostenibles.

Imaginemos la ciudad como un ser vivo. Sería como un enorme cíclope encerrado en una cueva donde nada se puede producir. Ese gigante, con el mismo peso que el resto de humanidad, permanece inactivo e inmóvil en su cueva. Vive gracias a la otra mitad del mundo que, como esclavos, le traen diariamente su comida. Mientras, él solo produce residuos que no sabe aprovechar y, saturada ya su pequeña cueva, se esparcen por todo el planeta. Para mantener con vida a este gordinflón en una cueva que solo ocupa el 2 % de la superficie terrestre, se necesita utilizar el 75 % de los flujos de energía y materiales a escala global. Y sus emisiones, descomunales como él, generan el

80 % de los gases de efecto invernadero. Un animal desmedido viviendo claramente más allá de sus posibilidades y que pone en peligro una casa común. Si imaginamos esto, estamos retratando las cifras globales de la insostenibilidad del conjunto de las ciudades en el mundo.

La ciudad deja huella

Para analizar la sostenibilidad ambiental con más detalle de cada ciudad, podemos utilizar diferentes metodologías. Por ejemplo, la conocida como la *huella ecológica* que se expresa como la superficie (valorada en hectáreas por habitantes) necesaria para producir los recursos que consumimos, asimilar los residuos generados y absorber todo el CO₂ liberado a la atmósfera. Según esta medida, la capacidad del planeta está alrededor de 1,7 ha por habitante. Como es lógico, las cifras de la huella ecológica para cualquier ciudad –con una superficie muy limitada y mucha población– siempre son muy negativas.



Mural de Xoana Almar y Miguel Peralta realizado en Monforte (Lugo), un pueblo de tradición ferroviaria y de vendimia. Foto: Cestola na Cachola

Por ejemplo, según cálculos de Manuel Enrique Figueroa, las personas que viven en Sevilla, necesitan 3,5 ha cada una de ellas, lo que significa que para asegurar la vida de toda su población se necesita una ciudad 23 veces mayor que Sevilla. Para poner otro ejemplo, ofrecido por *FootPrint Network*, la región del Mediterráneo en global ofrece una capacidad de 1,2 ha por habitante. Pero ciudades como Barcelona, Roma o Atenas necesitan 4,5, 4,7 y 4,8 ha por habitante, respectivamente.

Es cierto que analizar la huella ecológica de una ciudad podría parecer irrelevante y que deberíamos hablar en términos mayores y analizar en conjunto su región metropolitana, su comarca, su provincia o incluso su país. Si tomamos el caso español, con más del 75 % de su población viviendo en ciudades, las huellas ecológicas que triplican y cuadruplican la capacidad del territorio, hacen que, finalmente, también la huella ecológica de todo el Estado sea insostenible.

La huella alimentaria

Según *Footprint Network*, en muchos casos, entre una cuarta parte y la mitad de esta huella ecológica se corresponde a la alimentación. Pero podemos concretar más gracias a los estudios elaborados por Óscar Carpintero en relación con la ciudad de Valladolid. Para abordar la huella ecológica alimentaria, Óscar analiza tres dimensiones: la territorial, la hídrica y la huella de carbono.

Valladolid es una ciudad de pequeño tamaño (300.000 habitantes), comparada con capitales de 3, 4 o 20 millones de habitantes. Aun así, solo la huella territorial ligada a su alimentación se correspondía, en 2015, a 6,4 veces la superficie del término municipal. Es decir, con el patrón de consumo alimentario vigente, el potencial de autoabastecimiento alimentario del término municipal de Valladolid apenas alcanza el 8 %.

Respecto a las otras dos huellas, la huella de carbono alimentaria, explica Óscar, se refiere a la cantidad de gases de efecto invernadero asociados

Mural realizado por Xoana Almar en el 10º Festival do Desordes Creativas, en Ordes (A Coruña).
Foto: Cestola na Cachola



a un determinado alimento a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta huella de carbono se situó en 2016 en 1,48 tCO₂-eq/habitante, lo que supone que si se quisieran absorber estas emisiones, se necesitarían entre 37.400 y 150.000 ha de encinares. La huella hídrica de los alimentos se refiere a la cantidad de agua dulce usada para su producción en todo su ciclo de vida y, en este caso, asciende a 1.545 m³/habitante en 2016, lo que equivale a 21 veces el consumo de agua doméstica en toda la ciudad.

Otra de las características de nuestro agro en su cueva es su forma de condicionar el tipo de alimentación. Para tamañas dimensiones, los alimentos frescos deben de ser sustituidos por alimentos procesados resistentes a los viajes y al tiempo, y empaquetados en plásticos y cartones. En el caso de Valladolid, ya en el 2016 los productos preparados suponían más de la mitad del consumo. Pero, según Óscar, este gigante come mucho, come mal y también desperdicia mucha comida. «Se estima que, en promedio, una de cada tres toneladas que entran como alimentos en la cadena alimentaria en Valladolid se pierde en el proceso o se desecha con mayor o menor grado de aprovechamiento».

Un falso imaginario

Ante esta situación, son muy necesarias las nuevas políticas municipales que trabajan decididamente para corregir esta insostenibilidad, como desarrolla el Pacto de Milán; pero hablar de ciudades inteligentes, ciudades verdes o ciudades en transición ¿no puede estar creando un falso imaginario? ¿Acabaremos convencidas de que las ciudades son parte de la solución? ¿No estamos de nuevo ante una mirada urbanocéntrica?

¿De qué territorios llegan los alimentos para abastecer un sistema de vida donde las personas se concentran en pocos grandes núcleos? ¿Cuántos territorios pierden su soberanía alimentaria y ganan pobreza y hambre para alimentar a las ciudades?

Propongo que empecemos, al menos, a hablar con propiedad. Dejemos de hablar del terrible problema o de la lacra de la despoblación rural y definamos con claridad dónde está el foco del conflicto. El problema es la superpoblación urbana. Lo que hay que corregir es la España llena.

Gustavo Duch Guillot
Revista SABC

CONVERSATORIO

«Niñas y niños corriendo por la calle»

TRES RESPONSABLES DE MUNICIPIOS RURALES CONVERSAN SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS

Antes de empezar, sería importante que hicierais un retrato de vuestros municipios.

Cristóbal: Nuestro pueblo está en la Serranía de Ronda, tiene 1616 habitantes. Su principal actividad siempre ha sido la agricultura y hoy en día sigue siendo una de las más importantes, aunque hay otra actividad fuerte vinculada a la construcción en zonas de costa, que los últimos años había estado más parada, pero que ha resurgido ahora. Tenemos unas 140 personas en paro, y creemos que ya es de carácter estructural.

Cristina: Allariz está en el centro de la provincia de Ourense, tiene 6300 habitantes y una población muy dispersa, como es habitual en Galicia: en 92 km² hay 92 núcleos de población, lo que dificulta la gestión y es de los retos más importantes. Contra lo que sucede en general, en Allariz llevamos 20 años creciendo sin parar. Ahora mismo, en la Villa de Allariz, donde residen 4300 vecinos, tenemos una pirámide poblacional imposible de creer hace 20 años, con mucha población joven y 600 escolares de 0 a 12 años. En las parroquias rurales, por desgracia, no podemos decir lo mismo, por eso estamos metidos de lleno en proyectos ligados al sector primario.

Juan Carlos: Bueno, yo estoy abrumado después de oírlos, porque mi municipio, con dos pueblos, en total tiene 28 habitantes. Está en la comarca de la Sierra de Ávila, una zona de las más deprimidas de Castilla y León según el PIB, con una tradición de intervención político-religiosa muy potente que ha hecho que la gente sea muy

Participantes

Cristóbal González: Soy alcalde de Cuevas del Becerro (Málaga). Nuestro grupo político es una agrupación de electores que viene de una asociación juvenil que tenía una radio, un proyecto agrario, organizaba asambleas temáticas... Con más gente, dimos el paso adelante hace 4 años. Gobernamos con Izquierda Unida.

Cristina Cid: Desde junio de 2018 soy la alcaldesa de Allariz (Ourense), aunque llevaba siendo teniente de alcalde desde el año 2000. Mi grupo político, el BNG, lleva en el gobierno con mayoría absoluta desde el año 1991 y ahora estamos empezando a ver los frutos de ese largo trabajo.

Juan Carlos Soto: En la actualidad, soy teniente de alcalde de Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar (Ávila), el único municipio de toda Castilla y León gobernado por Equo, un partido ambientalista. De profesión, soy agente de desarrollo rural y animador sociocultural.

sumisa y tenga bastante miedo. Es un territorio ancestralmente ganadero, toda la estructura territorial e incluso urbanística está adaptada a esa actividad. Curiosamente es el pueblo con más plazas de turismo rural de toda la sierra de Ávila, porque ambientalmente es muy especial.



Mural realizado en 2016 por Xoana Almar y Miguel Peralta, en Vigo. Foto: Cestola na Cachola

Queríamos empezar tirando del hilo de lo que has dicho, Cristina, de apostar por el sector primario. ¿Los temas agrarios y alimentarios interesan en los pueblos? ¿La gente quiere seguir trabajando en el sector o se han de buscar otras fórmulas?

Cristina: Hace muchos años que trabajamos en este campo y en muchos momentos vimos que había que tomar decisiones valientes. Hay que gobernar con la población, pero a veces hay que ir un paso por delante, no solo tomar medidas que son populares en ese momento. Una de las primeras experiencias que pusimos en marcha fue reunirnos con los comuneros de un bosque en mano común con más de 100 ha de pino y forzar su tala para recuperar los terrenos que antiguamente fueron pasto para la ganadería extensiva, con ganado autóctono. Esta propuesta la población y los comuneros no la entendieron, les parecía que había que seguir plantando pinos porque lo ganadero era antiguo, así que nos supuso un coste electoral, redujimos el número de concejales, pero éramos conscientes de que era el camino a seguir. Cuando la gente ve el resultado, recuperas la confianza y ahora mismo nadie cuestiona aquella decisión. Se empezó a ver que el futuro de nuestros montes no tenía por qué ser la plantación de pino o eucalipto como se hace en muchas zonas de Galicia, sino que había otras posibilidades para incentivar el desarrollo local, fijar población y crear actividad económica ligada a lo rural. Hoy estamos criando bueyes con denominación local de buey de Allariz.

Cristóbal: ¿Cuánto tiempo lleváis en el gobierno?

Cristina: Desde 1991. Sería bueno que os contara cómo llegamos al gobierno porque explica muchas cosas. En el año 89 Allariz sufrió una revolución en letras mayúsculas. Muchos decimos que valió la pena vivir una vida solo por vivir aquello. Después de casi un año de movilizaciones, hubo un verano muy convulso que tuvo a los vecinos encerrados en el ayuntamiento 3 meses, viviendo literalmente allí (el salón de plenos estaba lleno de colchonetas). Se pedía solución a un problema de contaminación y a una situación de decadencia que parecía imposible revertir. Esa revolución llevó a un cambio en el gobierno municipal, que nació con un nivel muy elevado de participación ciudadana que sigue hasta el día de hoy y que seguimos alimentando.

Juan Carlos: Para entender nuestro contexto, hay que saber que mi pueblo es prescindible políticamente para cualquier partido. La Sierra de Ávila es muy grande pero solo hay 3000 habitantes. A eso hay que sumar que la administración provincial y principalmente la autonómica, con sus normativas, complican muchísimo el funcionamiento agrícola, ganadero y de desarrollo rural. La gente está tan ninguneada que en los informes de la mina a cielo abierto de feldespatos que quieren poner aquí, se decía que el lugar era muy interesante porque había «poca gente y con bajo nivel cultural». La lucha contra la mina ha sido muy importante, ya llevábamos años trabajando la sostenibilidad para el territorio y la población local rompió con la sumisión y rechazó un modelo que ignora y desprecia a lo rural. En un entierro (por aquí tenemos muchos), una persona mayor me dijo que estaba en contra de la minería porque es como si mordieran a un hijo suyo. Es

el paisaje cultural, el lugar del que han sacado sus recursos. Nosotros teníamos claro que queríamos un modelo de desarrollo sostenible en el que participe la población, y por eso pusimos en marcha un plan estratégico, construido colectivamente, que nos está ayudando a saber lo que queremos conseguir.

Vemos una similitud en vuestros dos discursos: la fuerza y la movilización ciudadana nacen de amenazas al territorio, el pueblo revaloriza lo que tiene y se activa, poniendo en el centro el sector primario como estrategia. ¿En Cuevas del Becerro es igual?

Cristóbal: No, es una situación totalmente diferente. Tengo los pelos de punta porque sois el espejo donde nos miramos, es el lugar hacia el que queremos ir. Aquí lo último siempre ha sido dedicarse al campo, cualquier otro oficio está mejor valorado. Por eso, ahora ponemos el foco en ello, organizamos cursos de formación relacionados con el campo y con recuperar oficios, desde la tala de olivar (*talaores*), que la practica gente ya muy mayor, hasta la canastería o los injertos. También hay un grupo de mujeres que está intentando salir adelante con su empresa de cosmética vegetal y lo queremos relacionar con las plantas que tenemos en los alrededores. Se han creado unas jornadas del campo, con un mercado, donde vienen proyectos de Andalucía a explicar lo que hacen y a servir de impulso. Hemos percibido que incluso viviendo en el medio rural, hay una desconexión entre el campo y la gente de nuestro pueblo.

Juan Carlos: De lo primero que nos dimos cuenta nosotros al llegar es de esa desconexión

que tú comentas. Hay jóvenes que no quieren volver al pueblo porque es como si hubieran fracasado, prefieren morirse de hambre en Madrid. Eso nos revolvió mucho, pero también nos dio información muy importante que nos hizo investigar el proceso por el que se ha denostado tanto la tierra: lenguaje, películas o el propio plan de modernización, que hablaba de llevar a las ciudades fuerza de trabajo rural porque era sumisa. Hay una barrera psicosocial muy importante. Uno de nuestros primeros programas fue «Orgullosos de ser rural», con la intención de subir esa autoestima.

“Estoy muy enfadado con el título de un libro, *La España vacía*. Aunque haya pocas personas, las hay, pero además hay agua y bienes naturales, hay animales, hay sabiduría...”



Mural de Xoana Almar y Miguel Peralta (2017) sobre un palomar cilíndrico, en Pontevedra. Cuenta historias cíclicas: el río Lérez pontevedrés o las diferentes fases de un eclipse. Foto: Cestola na Cachola

Cristóbal: Nuestro eslogan es «Yo soy de campo».

Cristina: Aquí hay una empresa que comercializa unas camisetas con el lema «Soy rural». Creo que empieza a haber una ola que aprecia lo rural y sus valores, pero esto tiene un peligro. Muchas de estas campañas hacen también que desde lo urbano se mire como un parque temático. Eso no quita que haya que modernizar e incorporar prácticas nuevas para que los trabajos y la vida sean lo más cómodo posible. Siempre se nos acusa de que en el rural nos empeñamos en poner en marcha proyectos que no son económicamente sostenibles. Hay ejemplos de empresas ligadas al automóvil que provocan auténticas movilizaciones de la administración para conseguir subvencionar lo subvencionable (y más) para su pervivencia, y eso no lo discute nadie. Sin embargo, al rural parece que le exigimos mucho más de lo que le exigimos a la banca, al textil o a la automoción. Yo creo que las empresas deben ser viables, pero también es verdad que la administración debe crear un entorno que lo haga posible.

Siguiendo con la necesidad de la implicación de la administración, ¿es la administración municipal el espacio ideal para este tipo de proyectos de revalorizar lo agrario?

Cristina: Con las mismas directivas aquí en España hay proyectos que no pueden ponerse en marcha y en Francia no tienen ningún problema. Cuando empezamos a impulsar la ganadería extensiva de ovejas en Allariz, fuimos a la administración para buscar apoyo para una quesería y el conselleiro del turno nos dijo que en Galicia las ovejas no daban leche. Tuvimos que acudir al gobierno de Euskadi para que formaran a nuestros trabajadores y gestionaran la compra de un rebaño de ovejas allí. A pesar de todas esas trabas, sí que se pueden hacer muchas cosas. Pusimos en marcha un banco de tierras «a la carta», cedemos las brigadas de limpieza de fincas, de vallado perimetral para la ganadería extensiva, etc. Esto supone poner al límite nuestras competencias, pero de no ser por estas facilidades, algunas personas hubieran abandonado. Se ha conseguido que se produzca mucho producto de huerta, cerveza artesana, embutidos, licores, jabón artesanal o la recuperación de industrias de pan y repostería tradicional que estaban a punto de desaparecer y ahora alguna tiene hasta 30 puestos de trabajo. Asumimos costes de tramitaciones, publicidad, etc. Somos responsables de la alimentación de las escuelas infantiles en las que tenemos competencia para que sea local, ecológica y demás. Pusimos en marcha un mercado de la reserva de la biosfera para la comercialización de esos productos y ahora estamos valorando la posibilidad de que el propio ayuntamiento abra tiendas en Vigo, o en otros lugares, para vender los productos del municipio. Tenemos una gran concentración de emprendedores porque la administración local se ha ganado la credibilidad, las cosas se ponen en marcha de verdad.

Juan Carlos: A final, el modelo, sea de 6000 o de 28 habitantes, es el mismo: hacer que todo circule en proximidad. La asociación de ganaderos del Aravalle no quería trabajar con tratantes a pesar del beneficio que suponía, solo quería obtener un precio digno, y están vendiendo sus terneros a la gente que va los fines de semana. Están muy contentos con esa relación humana que se genera, que tiene un valor añadido enorme. Se nos intenta imponer un modelo econocentrista que solo piensa en el dinero y no

en la calidad de vida de la población y a veces el trabajo de los ayuntamientos consiste en facilitar caminos alternativos a esas inercias. Al final, se trata de que sea la gente quien toma las decisiones.

Cristóbal: Claro que desde lo local podemos ayudar y colaborar, incluso lo que yo hago bastantes veces es hacer la vista gorda. Hay una legislación que aplasta totalmente a lo pequeño, y lo rural es lo pequeño. Hay que ir a la cuestión clave: cambiar las leyes que llegan a los pueblos, porque no basta con hacer la vista gorda como ayuntamiento, tarde o temprano van a llegar otros obstáculos. Ahora está esa moda de hablar de la despoblación, que es una realidad, y aquí quien se ocupa de eso vive en Sevilla y raramente ha venido a un pueblo. La única solución que yo veo es que la gente de los pueblos nos unamos, que hablemos con nuestra voz y en nuestro idioma, de lo que queremos para el mundo rural, para evitar eso que ha dicho Cristina: que otros escriban nuestra historia. Aquí estamos creando una red que se llama Pueblos en Movimiento para articularnos como medio rural y se están generando muchas expectativas.

¿Cómo condiciona el envejecimiento de la población o el despoblamiento vuestras decisiones, programas y políticas?

Juan Carlos: Castilla y León en los últimos 20 años ha recibido 20.000 millones de euros y seguimos perdiendo miles de personas al año. A los pisos de las ciudades de aquí se les llama «los pisos de la PAC», porque es en ellos donde los ganaderos han invertido el dinero de las subvenciones, para que sus hijos se vayan del pueblo. Yo estoy muy enfadado con el título de un libro, *La España vacía*. No es solo que esto no esté vacío, porque aunque haya pocas personas, las hay, sino que además hay agua y bienes naturales, hay animales, hay sabiduría... Tenemos que romper esa creencia tóxica de que en el medio rural no hay oportunidades. Desde que llegamos hace 3 años tuvimos claro que solos podríamos hacer poco (24.000 euros de presupuesto, tenemos); por eso, entre otras cosas, nos unimos con el municipio de al lado para contratar a una persona que dé un servicio personalizado de cuidados a la población que vive allí todo el año, porque no hay ninguna residencia en toda la sierra. Cuando decidimos contratarle, me dijo la secretaria que para 28 habitantes no podíamos tirar el dinero. Siguen sin apreciarse los servicios que se prestan para que las personas que viven en el rural tengan vidas dignas. Hay algo muy importante que está en el inconsciente colectivo, su vinculación emocional, y eso hay que aprovecharlo. Nuestro mayor cliente de productos agroalimentarios es la población vinculada emocionalmente, hijos o nietos del pueblo. Necesitamos su complicidad para construir cosas nuevas. Yo pienso que es en lo intangible donde está la clave de los cambios; por ejemplo, en hacer que comer sea un acto emocional y afectivo.



Mural de Miguel Peralta (2015) en el marco del festival Rexenerafest, en Carballo. Cuenta la historia de una moura, un ser de la mitología gallega. Foto: Cestola na Cachola

Foto: Cestola na Cachola



ayuntamiento es totalmente abierto, funcionamos por grupos de trabajo alrededor de cada concejalía, que está totalmente delegada. Estos grupos han dado pie a que actividades que hemos organizado hayan tenido éxito, porque la gente lo siente suyo.

Juan Carlos: Nosotros en Ávila llevamos la etiqueta de «rojos», precisamente porque queremos que participe la gente, algo que en el resto del territorio está normalizado.

Cristina: Yo creo que es increíble a estas alturas que pedir participación ciudadana parezca algo revolucionario, como si no fuéramos adultos para saber dónde queremos ir. Aquella revolución de Allariz la lideró Anxo Quintana (después vicepresidente de la Xunta de Galicia); recuerdo que cuando tomábamos posesión del cargo en las diferentes legislaturas, nos llevaba donde estuvo el castillo de Allariz, desde donde se ve una parte importante del municipio y nos decía: «Aquí estamos para soñar con lo que queremos ver dentro de 20 años, con un futuro para las generaciones que vendrán e implicar a toda la población que quiera sumarse a esto». Esto no puede solo ser el sueño de una corporación municipal, por mucha mayoría absoluta que tengamos, tiene que ser el de todo el mundo.

Y si os imagináis que subís a ese punto desde donde veis vuestro municipio, ¿qué es lo que soñáis?

Juan Carlos: Yo me he comprometido a que en los años que me queden de vida, demostrar que el medio rural es donde está la calidad de vida, el futuro real de los seres humanos. Me gustaría que eso sucediera.

Cristina: Yo sueño con volver a ver las fotografías de hace años tomadas desde ese mismo punto, donde todo el territorio estaba ocupado y trabajado por gente.

Cristóbal: Yo sueño con ver muchos niños corriendo por las calles, pegando pelotazos a las casas de la gente y poniéndolo todo patas arriba.

Revista SABC

Cristóbal: Sí, el discurso que hay que poner sobre la mesa debe estar más relacionado con lo afectivo, porque al final la gente de los pueblos nos seguimos entendiendo fácilmente, y tenemos unas características que están vinculadas con el trato humano, con lo pequeño, con tener la puerta abierta de tu casa, cooperar y ayudarnos. Si hablamos de eso, vamos a estar muy alejados de las corrientes de extrema derecha, que no valoran lo humano. Nuestra lucha debe estar ahí.

Los pueblos pequeños pueden ser laboratorios para ensayar nuevas formas de gobierno más horizontal. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuáles son las claves para que la gente y los colectivos participen en las políticas municipales?

Cristóbal: A nosotros, la participación nos diferencia de los gobiernos anteriores. Nuestro

PARA SABER MÁS

—La versión íntegra de este conversatorio estará disponible en www.soberaniaalimentaria.info

Nerea Morán Alonso, Isabel Vara Sánchez, Lidia García García, David Gallar Hernández y Ana Moragues Faus

movimientos sociales y ayuntamientos aprendizajes del trabajo conjunto

Reflexionamos sobre estos cuatro años de políticas alimentarias municipales a partir de los resultados recogidos en una serie de entrevistas a personas representativas del ámbito social, de la producción y de la gestión municipal en Madrid, Valencia y Córdoba, y de nuestra propia experiencia en estos procesos.

En los cuatro años transcurridos desde las últimas elecciones, las políticas alimentarias han irrumpido en la agenda de numerosos ayuntamientos del Estado, como respuesta a la demanda de los movimientos sociales y en el contexto global favorable que ha supuesto el Pacto de política alimentaria urbana de Milán. Con anterioridad a las elecciones municipales de 2015, los movimientos sociales agroecológicos propusieron una hoja de ruta para los gobiernos municipales, recogida en documentos como la *Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios* (elaborada en el Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria de Zaragoza en 2014) y otros más locales. Se trata de demandas y propuestas claras que surgen de una larga trayectoria en el trabajo en torno a la soberanía alimentaria por parte de entidades de la sociedad civil, en ocasiones reunidas en espacios de articulación.

Numerosas ciudades europeas habían adoptado ya políticas en este sentido, pero en nuestra geografía se puede destacar la centralidad del

enfoque agroecológico en el proceso, debido al protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil y al apoyo de las candidaturas municipalistas. De esta forma, se han abierto espacios que pretenden coproducir políticas públicas en los que las organizaciones de la sociedad civil están trabajando junto a personal técnico y político de los ayuntamientos en la definición y desarrollo de estrategias y proyectos agroalimentarios.

Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de coproducción de políticas públicas?, ¿cuáles han sido las claves de estos procesos? y ¿qué aprendizajes podemos extraer de los mismos? Al igual que en otras cuestiones centrales en la transición ecosocial (derecho a la vivienda, movilidad, modelo urbanístico...), la percepción que se tiene en los movimientos sociales y en las instituciones del compromiso de cambio y la capacidad de impacto de las acciones desarrolladas puede diferir. Las expectativas de la sociedad civil a menudo chocan con la capacidad de acción de los equipos de gobierno, con los ritmos municipales y con las trabas normativas y burocráticas.

El encuentro entre sociedad civil y ayuntamientos: superando las desconfianzas

Sin duda, uno de los factores que ha facilitado el trabajo entre la sociedad civil y los ayuntamientos ha sido la incorporación de personal político y técnico con una trayectoria previa en movimientos sociales. En la definición y seguimiento de políticas alimentarias, ha sido necesario desactivar las desconfianzas mutuas entre institución y sociedad civil, dado que se trata de procesos que implican a perfiles muy diversos tanto fuera como dentro de los ayuntamientos, debido a la transversalidad del tema. En este tiempo se han establecido nuevas relaciones en múltiples direcciones, no solo entre institución y movimientos sociales, sino también entre organizaciones de la sociedad civil relacionadas o no con el ámbito agroecológico. Se puede concluir que se ha llegado a un entendimiento mutuo, y que la sensación general es de estar trabajando en común con unos objetivos compartidos.

Los espacios de interlocución y coordinación

Conformar espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil trabajan junto a representantes municipales ha sido fundamental para avanzar en la definición de políticas o acciones y desactivar las desconfianzas. Las formas varían, desde los Consejos Municipales como el de Valencia, hasta otros espacios no colegiados, en forma de Mesa de Seguimiento (Madrid) o Mesa de Coordinación (Córdoba). Precisamente la formalización de estos espacios es uno de los debates abiertos: su continuidad y legitimidad, el tiempo necesario para desarrollar reglamentos y

aprobarlos oficialmente, la definición de las cuotas y condiciones de participación en los mismos o sus funciones.

Se ha detectado como clave en el buen funcionamiento de estos espacios el interés y el compromiso de las personas que participan en ellos y su predisposición a cooperar. Aunque en un balance general se puede afirmar que hasta el momento han funcionado porque existe el compromiso de generar un trabajo colectivo, también se han dado situaciones en las que las personas participantes se han parapetado en la defensa de intereses particulares, perdiendo la visión estratégica a medio y largo plazo.

Destaca la necesidad de incluir una diversidad suficiente de actores tanto institucionales como sociales, a la vez que mantener su capacidad operativa, para que realmente sirvan para tomar decisiones e impulsar acciones concretas sin que se pierda el interés inicial.

¿Coproducción de políticas públicas?

Una cuestión central es hasta qué punto se puede hablar de coproducción de políticas públicas. Algunas personas destacan que, más que políticas, se están desarrollando acciones concretas, mientras que las estrategias o programas integrales de largo recorrido se han definido o están en definición pero es aún pronto para valorarlas. Se trata de procesos que deben permitir ensayar, aprender y redefinir sobre la marcha.

En relación con los tiempos necesarios, otra cuestión que se ha planteado es la necesidad de pasar de los diagnósticos y estudios a la acción, para poder llegar a resultados tangibles cuanto antes. Algunas personas indican que ya hay suficiente experiencia y conocimiento desarrollado,

y que hay acciones que se pueden realizar sin perder tiempo ni malgastar recursos en una justificación excesivamente detallada de los motivos, los precedentes, etc. En este sentido, se están dando pasos con la implantación de experiencias piloto donde se desarrollan acciones directas (Córdoba).

La prioridad y el compromiso político

La prioridad política y la asunción de la agenda por parte de las altas instancias municipales han sido desiguales. En algunos casos, las políticas alimentarias han sido muy visibles, como en Valencia, a raíz de la capitalidad de alimentación sostenible de la FAO en 2017. También en Madrid el apoyo de la alcaldía ha permitido que sea una cuestión transversal que involucre a distintas concejalías y departamentos o delegaciones municipales. En Córdoba, el interés de varias delegaciones y algunos grupos municipales ha impulsado, con el detonante de la oportunidad política del Pacto de Milán, una mesa de coordinación transversal.

Sin embargo, los avances concretos no han llegado a una consolidación profunda de la agenda agroecológica en los municipios. Si se hace un balance general, algunas cuestiones concretas se han normativizado, como el cambio de criterios de contratación en la Red de Escuelas Infantiles de Madrid. En otras cuestiones, se han definido acciones que no se han ejecutado o que se han desarrollado en forma de proyectos piloto que no están suficientemente consolidados, y muchas decisiones no han sido vinculantes, lo que se achaca a una falta de compromiso político y a un control insuficiente de los mecanismos de gestión y los protocolos municipales. La cuestión del presupuesto destinado a estas políticas, o de

cómo se desglosa ese presupuesto, también da una idea de la prioridad que se les otorga dentro de los ayuntamientos.

En cualquier caso, es evidente que los ayuntamientos son fundamentales para impulsar estos procesos y extender las actuaciones hasta ámbitos que los movimientos sociales no alcanzarían por sí mismos.

Gestión municipal: ritmos, competencias y movilización de recursos

Uno de los principales problemas detectados ha sido la complejidad de la gestión municipal. A un ritmo lento en el desarrollo y consolidación de acciones concretas, y en la formalización de nuevas formas de hacer (protocolos, espacios, etc.), hay que sumar la dificultad de vencer la inercia en el funcionamiento institucional, las resistencias internas, el atrincheramiento en la interpretación cerrada de los reglamentos, o la inexperiencia de las personas que por primera vez tienen que desenvolverse en estos ámbitos. Todo ello entorpece enormemente el ensayo de innovaciones. Detrás de esta dificultad de gestión, además de la propia arquitectura normativa y jerárquica de los ayuntamientos, se encuentra su falta de recursos humanos y económicos. En la práctica, el inconveniente de no contar con suficiente personal municipal especializado, de no poder realizar nuevas contrataciones de personal propio, de tener bloqueados los presupuestos y

“ Los ayuntamientos son fundamentales para impulsar estos procesos y extender las actuaciones hasta ámbitos que los movimientos sociales no alcanzarían por sí mismos. ”



Mural realizado en 2016 por Xoana Almar y Miguel Peralta, en Vigo.
Foto: Cestola na Cachola

de no poder movilizar recursos con rapidez ha supuesto un freno importante al avance de los procesos. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil han aportado una visión más amplia y han tenido capacidad de buscar y coordinar recursos externos.

Por otra parte, destaca la falta de fluidez en la comunicación entre áreas municipales, la complejidad en las relaciones y procedimientos, y la superposición de competencias y responsabilidades. Cuestiones que desde fuera parecen sencillas, se vuelven complicadas, lentas y costosas de coordinar y ejecutar en su traducción a los procedimientos municipales. A esto hay que sumar que en ocasiones las competencias municipales no son suficientes para desarrollar las acciones o llevar a cabo los cambios estructurales precisos.

Las organizaciones de la sociedad civil: tensión entre la ejecución y la reclamación

El papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido el de expertas que aportan conocimiento especializado, experiencia y metodologías de trabajo, que vienen a suplir la falta de experiencia en este campo dentro de los ayuntamientos. Esta función se cumple a través de los espacios de participación y el aporte de trabajo voluntario, y mediante el desarrollo de un trabajo profesionalizado en la gestión de proyectos concretos.

La otra cara de una situación que podría parecer favorable para las organizaciones de la sociedad civil es que este cometido exige grandes esfuerzos y recursos en el seguimiento, en la realización de propuestas y en la ejecución de las mismas. Esfuerzo y tareas que en ocasiones se perciben como responsabilidad de la parte institucional y que se asumen voluntariamente para que no decaigan los procesos. Esta situación resta energía a otros espacios no institucionales de encuentro de colectivos desde los que ejercer contrapoder. Los movimientos sociales reconocen esta tensión y admiten también que las energías se dividen. Cuando además se adopta el papel de entidades profesionalizadas en la consultoría y ejecución de acciones, es complicado seguir construyendo una visión más estratégica y reclamar a la institución. También es cierto que algunas entidades no han tenido la capacidad de respuesta o el interés en profesionalizarse y la cuestión entonces está en quién puede desarrollar

y ejecutar tareas que requieren un enfoque agroecológico y de economía solidaria, que es ajeno a la mayor parte de las empresas que tradicionalmente trabajan con la Administración.

Finalmente, cabe destacar que el trabajo en los espacios de coordinación y en la ejecución directa genera un aprendizaje continuo del personal técnico, una mayor proximidad con los representantes municipales y un conocimiento detallado de las trabas que estos afrontan en el desarrollo de los compromisos asumidos. Sin embargo, esta empatía se reconoce como algo que no debería frenar la reclamación cuando los avances no son suficientes.

La agroecología en el discurso municipal: entre el aprendizaje y la tergiversación

Otra cuestión es si la agroecología se ha integrado en el discurso municipal y de qué manera lo ha hecho. Aunque la Administración reconoce que estos procesos han tenido un componente importante de aprendizaje para personal técnico y político, es posible que esta integración haya sido más operativa que conceptual, es decir, que se haya reflejado en un conocimiento de datos y procesos que se dan en la ciudad o en enriquecer la mirada sobre sus competencias, más que en una comprensión profunda de las implicaciones y consecuencias de afrontar una transición agroecológica.

En ocasiones, la visibilización de los valores agroecológicos en el discurso no se ha producido, o los conceptos están presentes solo en documentos técnicos, pero no constituyen el centro del mensaje que se transmite a la ciudadanía en las estrategias de comunicación. En otros casos, los conceptos se han asumido pero se han tergiversado, de modo que se utilizan sin tener un conocimiento claro de las diferencias o significados de los mismos. Finalmente, cabe un peligro de convencionalización del discurso, como ha podido ocurrir con otros paradigmas como el de la sostenibilidad ambiental, reducido, debilitado e instrumentalizado en su uso institucional.

Nerea Morán Alonso, Isabel Vara Sánchez, Lidia García García, David Gallar Hernández y Ana Moragues Faus
Investigadoras y activistas sobre agroecología y soberanía alimentaria en Madrid, Córdoba y Valencia

DE UN VISTAZO
Y
MUCHAS ARISTAS

Con unos cuantos ejemplos, como un vistazo a vuelo de pájaro, mostramos algunas de las iniciativas de políticas alimentarias municipales que, por su origen rural o su contundencia, pueden ser inspiradoras.

ROMPER EL LOCALISMO MUNICIPAL

En Argareal Rural llevamos muchos años trabajando en el desarrollo rural sostenible para la mejora de calidad de vida de la población local a través de la participación activa. Entendemos la participación activa como sagrada, es nuestro modus operandi de cada día. Defendemos la colaboración y ayuda mutua entre los ayuntamientos y la población, pero también la cooperación entre ayuntamientos, que no siempre se tiene presente.

En el caso de nuestro pueblo, Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar (Ávila), si no se hubiera unido con otro municipio ahora mismo no podría contar con un operario todo el año al que llamamos el ángel de la guarda porque sus funciones van más allá de las habituales, se ocupa de la «ayuda humanitaria». Solo saber que hay una persona preocupada por quienes viven en los pueblos (la mayoría, de avanzada edad), produce gran tranquilidad a las ya pocas personas que pasan aquí todos los días del año.

Desde la ruptura del localismo municipal y la participación activa, por aquí han nacido muchos proyectos. Cinco municipios trabajamos juntos a partir de un programa de prevención de incendios forestales y como resultado han surgido iniciativas como la Asociación de Ganaderos del Aravalle AraVgredos, en la que cinco ganaderos comenzaron un proceso de comercialización de la carne de sus reses en tramo corto (vecindario, turistas, población flotante); la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas ProUmbrías, que autogestiona las fincas y sus recursos (pastos, leña, agricultura, etc.); o la Asociación Micológica Amica, donde la población local trabaja conjuntamente para lograr un uso sostenible del recurso.

Asimismo, a partir de un Plan Estratégico de Desarrollo Rural Sostenible, ha surgido, por ejemplo, la Asociación de Oficios Artesanos de la Sierra de Ávila Ofyarte, que aglutina a personas de toda la comarca y organiza todo tipo de eventos, o una asociación que se dedica a la producción de huevos ecológicos y a su distribución en proximidad. Incluso otros cinco municipios de la provincia de Ávila han creado una asociación llamada Ávila en Clave Etnobotánica dedicada a la promoción, investigación y divulgación de los usos de las plantas.

Por último, se puso en marcha la Escuela de Alcaldes de Castilla y León. Trabajando codo con codo con otros municipios se advierten necesidades colectivas que de otra forma no podrían abordarse. Es fundamental dotar a cada uno de nuestros pueblos de capacitación y dar a conocer programas que están funcionando con éxito entre alcaldías, concejalías, personal técnico, etc.

En resumen, hay que romper el localismo municipal. Tan solo hay que recordar el trabajo de los pueblos de toda la vida: huebras, hacenderas, a hombro vecino, a prestación personal, a caminos, a regaderas..., que a lo largo de cientos de años dibujaron el paisaje actual de nuestro mundo rural y que ahora está cambiando a una velocidad vertiginosa por políticas alejadas del territorio.

Juan Carlos Soto
Teniente de alcalde de Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar y coordinador de Argareal Rural

RED TERRAE, IMPULSANDO LA NEORRURALIDAD AGROECOLÓGICA

La Red Terrae se inició en 2010 y actualmente cuenta con 60 municipios. Su objetivo inicial era dinamizar los recursos infrautilizados de municipios rurales, sobre todo las tierras. Ya en 2012 se organizó un banco de tierras en línea, con un sistema de contratos de custodia agroecológica para personas emprendedoras; al año siguiente, comenzamos a diseñar una estrategia formativa y a ofrecer formación en alfabetización y emprendimiento agroecológico. Asimismo, se creó la marca Terrae Ecolmo que garantiza la compra de productos durante unos meses a personas en prácticas de producción agroecológica por parte de restaurantes.

Pero nos parece claro que debemos ampliar nuestra estrategia, sobre todo en un momento en que la PAC va a continuar manteniendo las dinámicas que generan la actual sangría agro-demográfica. En este sentido, una de nuestras principales apuestas es **el enfoque NERA** que ya ensayamos en un pueblo de 100 habitantes en Salamanca en 2014, y que estamos trabajando con apoyo de la Junta de Extremadura y del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). NERA es una

estrategia para enlazar comunidades urbanas y rurales. Comunidades de acogida en los pueblos que estén dispuestos a recibir grupos de personas urbanas que se formen trabajando la tierra, y que al acabar la formación se queden como nuevas agricultoras o ganaderas. Por eso necesitamos el apoyo de «comunidades de salida», barrios, asociaciones vecinales, universidades, etc., que quieran apoyar la salida de personas y se comprometan a comprar sus producciones agroecológicas, enlazando ciudad y campo. En este momento en Red Terrae esta línea de trabajo está suscitando el interés de muchos pueblos asociados. Hemos acumulado mucha oferta de tierras, que necesitan para ser reactivadas agroecológicamente una población neocampesina de origen urbano o no agrario, que tenemos que acompañar, formar y acoger. Este es el gran reto de la transición agroecológica que da al tiempo respuesta al reto demográfico de los extensos despoblados de la península ibérica.

francO Llobera
Responsable de formación
y prospectiva de Red TERRAE

DE INICIATIVAS POPULARES A LEYES. LA LEY DE LA HUERTA DE VALENCIA

El pasado mes de febrero las Cortes Valencianas aprobaron, gracias a la mayoría de progreso (PSOE, Compromís y Podem) la largamente esperada Ley de la Huerta de València (Ley 5/2018). La propuesta partía de una Iniciativa Legislativa Popular del año 2001, impulsada por entidades ecologistas y vecinales. El proyecto pretende salvaguardar y dinamizar este paisaje histórico que se extiende a norte y sur de la ciudad de València y que abarca cuarenta términos municipales, un entorno agrario en el que la presión urbanística ha hecho desaparecer casi el 70 % de la superficie en medio siglo, dejando acequias históricas en estado crítico. La Ley, por otra parte, sirve como marco general para la aprobación de otros dos instrumentos legales. El primero es El Plan de Acción Territorial (PATH), aprobado en noviembre de 2018, que establece los tipos y

zonas de protección, regula los usos y limita el crecimiento urbanístico. El segundo es el Plan de Desarrollo Agrario, que se centra en la regulación y el apoyo a la actividad agraria en la huerta, **para garantizar que la actividad agraria predomine sobre otras como el turismo o los servicios.**

Por tanto, los objetivos de la Ley y ambos planes pasan, por aportar seguridad jurídica; las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura necesitan saber que la tierra que cultivan tiene un futuro garantizado y no va a acabar expropiada o terciarizada. Asimismo, se recoge la demanda histórica de promocionar los productos de la huerta con una marca de calidad, procurando mejorar la imagen del producto para la exportación y para obtener precios más justos. Pero además, como es habitual en muchos espacios agrarios, el abandono de cultivos se ha

convertido en uno de los principales problemas debido a la falta de productividad, de relevo generacional o, en el caso de València, por las expectativas urbanísticas derivadas de la proximidad a una gran área metropolitana. En estos casos, la Ley propone el arrendamiento forzoso en favor de un tercero o la cesión al Ente Gestor de la Huerta, aunque remarcando que la «expropiación de uso» solo se daría en casos extremos y tras un proceso de mediación. Se trata de una medida que ha provocado la crítica de la oposición, pero que es muy importante para evitar

las compras especulativas en la huerta. El futuro agrario de estas superficies, por tanto, pasa por potenciar el arrendamiento. Con este objetivo, ayuntamientos como el de València o la propia diputación provincial están creando bancos de tierras de gestión municipal. El objetivo obvio es facilitar el acceso a la tierra a jóvenes que apuesten por la agricultura.

Marc Ferri
Per l'Horta

IRUÑEA, UNA GESTIÓN VALIENTE

Si estás en el tema de la soberanía alimentaria y te ha tocado batirte el cobre con ámbito municipalista, habrás escuchado mil excusas y sentido mil resistencias. Que si es un lío; que si no va a alcanzar con la producción local campesina; que no se puede adaptar tal o cual ley; que el tema alimentario es muy complicado; que lo local, fresco y de temporada es muy caro o que no les va a hacer gracia a las usuarias... Pero, en realidad, todas estas barreras se vencen con buenos ingredientes: una taza de presión de la sociedad civil, unas cucharadas de receptividad y voluntad política, buena dosis de formación y transición del personal técnico y el funcionariado, un chorrito de participación e inclusión de la sociedad y, sobre todo, fuego lento de soberanía alimentaria y corresponsabilidad entre producción campesina, consumo responsable y compra pública.

Es de esta manera como las cosas están marchando en Pamplona/Iruñea. En 2016 surge en Navarra un proceso en torno al llamado Parlamento de Soberanía Alimentaria para la construcción colectiva de Sistemas Alimentarios Locales sostenibles con criterios de soberanía alimentaria. En esa dirección, puede decirse que Iruñea está haciendo los deberes. En la última legislatura, la ciudad se adscribe al Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana y a la Red de Ciudades por la Agroecología. Todo ese itinerario podría resultar una ensalada de declaraciones sin aterrizaje práctico, pero fruto del trabajo constante, en 2018 se publicaron los pliegos para diseñar todo un flujo de trabajo en las cocinas y menús de las escuelas infantiles llamados Hemengoak (de aquí), adaptados a la despensa local con criterios saludables, ecológicos

y nutricionales, que la asociación Menjadors Ecològics contribuyó a hacer realidad. A principios de 2019 se han publicado los pliegos de compra pública para 10 escuelas infantiles, lo que implica que 1000 menús al día serán de alimento fresco, local, de temporada y ecológico, con criterios de soberanía alimentaria.

En ese sentido, el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles de Iruñea ha sido audaz y ha apostado por unos pliegos con 13 lotes de pan, lácteos, frutas y verduras, con criterios de inclusión social y muy orientados a que las producciones y transformaciones campesinas puedan optar a este espacio de compra pública. La idea es que los menús Hemengoak alimenten a la población infantil y al mundo rural vivo, la despensa natural de Iruñea/Pamplona. Toda esta apuesta ha sido posible gracias a un trabajo en red y a la construcción de alianzas entre la sociedad civil y la Administración pública. La implicación del Grupo de Compra pública de Navarra (compuesto por Asociaciones de APYMAS de las escuelas, parlamentarias, productoras, sindicatos agrarios y escolares, organizaciones sociales...) y el trabajo realizado por INTIA y CPAEN han hecho que este cambio sea posible. Pero también el Ayuntamiento de Pamplona se ha dejado interesar de modo proactivo y ha asumido de modo corresponsable un camino no exento de dificultades y vértigo para recuperar las cocinas con los colores, saberes y sabores de nuestro paisaje y paisanaje.

Jaxin G. Viniestra
Fundación Mundubat
y Grupo de Compra Pública de Navarra

MUNICIPIOS CONTRA LAS MACROGRANJAS

Según Daniel González, de Pueblos Vivos de Cuenca, que forma parte de Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, en el último año, solo en la provincia de Cuenca se han presentado más de 30 solicitudes de licencias de explotación para macrogranjas porcinas, mientras que en años anteriores rondaban las 4 solicitudes. Este incremento se debe, principalmente, a los planes de expansión de dos de las mayores empresas cárnicas del Estado (Incarlopsa y Vall Companys), y a las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, desde 2016, incluye el sector porcino de cebo como estratégico.

Ante esta situación, la población de las zonas rurales, movimientos ecologistas y de defensa del territorio, organizaciones de protección animal, consumidoras, ganaderas extensivas y defensoras del mundo rural, se han agrupado en diferentes plataformas para impedir que el beneficio de unas pocas empresas cárnicas destruya el entorno y el empleo de sus comarcas.

Uno de los aspectos que critican es la falta de rigor en la evaluación ambiental por parte de las administraciones competentes en el momento de aprobar la licencia para la instalación de macrogranjas. Sentencias recientes (como las de Huerta de la Obispalía y Cañete, en Cuenca) dan la razón a la posición de las plataformas, al confirmar que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y, sin embargo, el órgano ambiental les ha dado el visto bueno.

Ante la proliferación de solicitudes, las plataformas solicitan una moratoria en la concesión de autorizaciones ambientales, pero ¿puede hacerse algo más contra las macrogranjas?

Con voluntad política se pueden aprovechar las actuales leyes y normativas para impedir su instalación. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental estatal y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León establecen, entre otras causas de inadmisión, el pronunciamiento de un órgano de la administración pública competente manifestando la inviabilidad del proyecto. En Cidones (Soria), el Ayuntamiento ha usado sus normas urbanísticas municipales para argumentar que el emplazamiento para la granja no es posible y, de momento, la Comisión de Medio Ambiente no permite la instalación, puesto que los informes municipales demuestran su inviabilidad desde la perspectiva urbanística y para garantizar la protección natural, paisajística y forestal de la zona.

Ahora es el momento oportuno para exigir a los ayuntamientos que defiendan el territorio y que pongan dificultades normativas a la instalación de estas macrogranjas poniendo en práctica el principio de autonomía y de una de las pocas competencias que les quedan: la gestión urbanística del municipio.

Revista SABC

LAS MEDIDAS QUE NADIE EMPUJA

En todo el Estado español se está demostrando que desde los municipios se pueden empujar proyectos e iniciativas para llenar de vida el mundo rural. Sin embargo, por radicales, complicadas o utópicas, muchas no se llevan a cabo. Y debemos preguntarnos por qué.

Red Terrae explica que en sus municipios trabajan para enlazar comunidades rurales y urbanas y facilitar el establecimiento de personas en los pueblos. Pero, desde las propias ciudades, ¿no existen propuestas para incentivar o facilitar este tipo de prácticas, para disminuir su población? Seguramente, despoblar las ciudades es una de las mejores maneras para garantizar su sostenibilidad ambiental.

A la vez, observamos que el fenómeno de la despoblación permite que se acepten proyectos muy agresivos y dudosos para el medio rural, como las macrogranjas de cerdos o la minería. ¿Existen iniciativas municipales para declarar sus territorios libres de este tipo de proyectos? ¿La población local los respaldaría más allá de si entra o no en sus competencias?

En muchas ciudades, se consigue poner en marcha nuevas cooperativas de consumo o incluso supermercados cooperativos para favorecer otro modelo de consumo. Mientras esto ocurre, también vemos cómo se multiplican los grandes supermercados convencionales. ¿Existen

iniciativas municipales para prohibir nuevas grandes superficies? Más allá del cumplimiento de las leyes europeas sobre la competencia, ¿la sociedad apoyaría medidas de este tipo? ¿Queremos seguir permitiendo que grandes cadenas de comida rápida se instalen junto a los colegios o institutos favoreciendo una mala alimentación?

Por último, la gran cuestión. Como se ha explicado en muchas ocasiones, los ayuntamientos son los responsables políticos de cada uno de los grandes mercados de abastos que centralizan la distribución alimentaria de las ciudades. Los *mercados* (Mercabarna, Mercamadrid, Mercavalencia) son empresas públicas con un 51 % de propiedad en manos del ayuntamiento correspondiente. ¿Favorecer un nuevo modelo de alimentación local y de proximidad no pasa por abordar el funcionamiento de los mercados que en la actualidad son, sin ningún lugar a dudas, un eslabón fundamental del sistema alimentario industrial y globalizado? ¿Por qué no evitamos que por los mercados circulen los tomates de Holanda que arruinan la producción local u otros muchos ejemplos? ¿De qué sirve promocionar la sostenibilidad alimentaria si no combatimos directamente los modelos insostenibles?

Revista SABC

Mural de Xoana Almar y Miguel Peralta (2016), en Vigo. Foto: Cestola na Cachola





Documental 'Alter Nativas'

Acaba de lanzarse la campaña de microfinanciación para *Alter Nativas: Hacia un futuro sostenible*, un proyecto de largometraje documental sobre iniciativas de transición ecosocial.

Alter Nativas pretende generar material divulgativo de calidad para mostrar experiencias que transitan hacia un mundo más sostenible y resiliente, partiendo del análisis del contexto actual. Desde múltiples ámbitos (energía, alimentación, educación, economía, gobernanza...) y escalas (municipal, rural, urbana...) se mostrarán sobre todo experiencias de la península ibérica, siempre con un discurso universal. El enfoque del

documental será colectivo e integrador, poniendo atención en las interrelaciones y conexiones entre iniciativas.

Después de un par de años de gestación y unos últimos meses de trabajo intenso, el documental empezará a grabarse próximamente, con la esperanza de poder estrenarlo a principios de 2020.

¡Os animamos a conocer más sobre el proyecto y a contribuir a hacerlo posible!

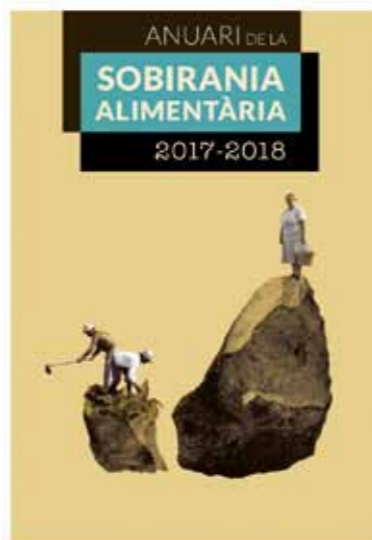
www.alternativasdocumental.info/goteo

Anuari de la Sobirania Alimentària 2017-2018

A finales de 2018, se publicó el primer *Anuari de la Sobirania Alimentària*, una herramienta de análisis crítico que recoge un gran abanico de referencias de noticias, informes, artículos de opinión, documentales y sucesos relacionados con la alimentación y el medio rural. El trabajo de recopilación se organiza en dos bloques, uno de ámbito general y otro centrado en Catalunya, País Valencià y Illes Balears, y se abre con un prólogo en el que, por un lado, dos periodistas independientes (de *El Crític* y *La Directa*) reflexionan sobre cómo reflejan los medios de comunicación el medio rural y la soberanía alimentaria y, por otro, cuatro personas de ámbitos

diferentes (universidad, producción, dinamización y administración pública) conversan sobre el pasado, presente y futuro de la soberanía alimentaria en Catalunya. Se incluye, también, un apartado final con la descripción de muchos de los colectivos que trabajan por la soberanía alimentaria en los Països Catalans.

Se trata, en definitiva, de una experiencia piloto con el objetivo de generar debates y plantear nuevos paradigmas, y que animamos a reproducir en otros territorios.



<https://anuarisobiraniaalimentaria.cat>

LA UNIVERSIDAD MUCHO POR LABRAR Y POR COSECHAR

¿Qué papel tiene la alimentación?, ¿qué se come? Mostramos tres formas diferentes y complementarias de llevar propuestas de agroecología y soberanía alimentaria al espacio universitario.

Alimentando el campus

El proyecto Red Natura: Alimentando el Campus¹ de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid, impulsado por el Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT) busca promover la transición hacia la sostenibilidad alimentaria involucrando a la comunidad universitaria. Al tiempo, apuesta por un medio rural vivo a través de la incorporación a las opciones del menú de productos ecológicos, de proximidad, de temporada y procedentes de la Red Natura 2000 de la biorregión de Madrid.

Como parte de este proceso, nos sumamos al lanzamiento de la foto-acción #MuestraTuMenú, con imágenes donde se comparaba un menú colmado de hidratos de carbono, azúcares procesados y agua embotellada con un menú de Red Natura, colorido y otoñal, con remolacha, garbanzos y fruta.

Temporada, proximidad y producción ecológica son conceptos, por desgracia, prácticamente ausentes tanto en las cafeterías como en los currículos y guías docentes de hace dos décadas y que, poco a poco, van ganando espacio, movidos, principalmente, por la acción ciudadana que se filtra por los muros de la universidad. Tanto entonces como ahora, comer en la cafetería no es la opción preferida, y son muchas las personas que traen la fiambra de comida casera. ¿No es incongruente asistir a clases sobre biotecnología, fruticultura, cooperativas agrarias, desarrollo rural, etc. y, sin embargo, saber tan poco sobre la comida que se sirve en los comedores?

Hoy, en la ETSIAAB, la docencia en torno a la agricultura ecológica se limita a una asignatura optativa con seis créditos en el Grado de Ingeniería Agroambiental. La cursan una media de no más de 15 estudiantes, la mitad son erasmus de la Unión Europea y Latinoamérica, por más que el Estado español se siga situando como el primero de Europa en producción ecológica.

«Con este proyecto nos hemos sorprendido al ver que los estudiantes de Agronomía no conocen

1. Proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Transición Ecológica)



Menú universitario un día cualquiera.

Foto: Observatorio para una Cultura del Territorio

las experiencias agroecológicas de la Sierra de Madrid, ni los circuitos cortos de comercialización, ni han tenido la oportunidad de conocer a quienes les alimentan»,² explican las impulsoras del programa. Sin embargo, gracias a estas acciones han podido comprobar que la comunidad universitaria es una aliada para el cambio, ya que «la mayoría apostaría por opciones saludables en las máquinas de venta automática, por productos locales y de temporada en el menú, por la reducción de envases y por el compostaje de los residuos orgánicos».

https://observatorioculturayterritorio.org/wordpress/?page_id=1229

Mercados en la universidad

Los edificios de la Universitat Politècnica de València ocuparon 62 hectáreas de huerta, pero pocas personas de la comunidad universitaria actual lo recuerdan. Sucedió a partir de 1969 y, de manera paulatina, la huerta parece asomarse de nuevo a esta zona de la partida de Vera.

En 2016, gracias a la colaboración entre el Grup Consum Vera y la fundación CEDAT, se creó el proyecto «Cistella responsable UPV», con dos objetivos: fomentar la venta de productos de temporada, locales y ecológicos, y favorecer la inclusión socio-laboral de personas con diversidad funcional. El personal de la Fundación CEDAT reparte todas las semanas en los despachos de la universidad entre 40 y 50 cestas de

2. <https://madridagroecologico.org/madrid-agroecologico/lo-que-esconde-la-comida/>

verduras y hortalizas, producidas en pequeñas fincas cercanas.

Por otro lado, desde 2017, todos los jueves, productoras y productores se acercan a vender sus productos al Mercado Agroecológico de la UPV, promovido originalmente por organizaciones sociales con sede en la universidad, pero actualmente ya gestionado directamente por la UPV.

En este mercado se priorizan los productos de km 0, con certificaciones participativas de garantía (SPG) o de economía social y solidaria. Actualmente, cuenta con 10 puestos con una gran variedad de productos. Para las personas productoras que participan, la asistencia al mercado supone una serie de riesgos como la inestabilidad, la dependencia de la climatología, la estacionalidad, la dificultad de fijar el hábito de compra, la volatilidad de las ventas, los costes elevados o la exigencia de tiempo. Esta situación acaba por obligarles a buscar otros canales de venta que proporcionen más seguridad. A todo ello se suma el hecho de organizar el mercado en un campus, un lugar cuya población tiene un alto nivel formativo, pero que en gran parte no tiene autonomía económica.

Sin embargo, es mucho lo que aún se podría hacer desde la universidad. Como lugar autónomo en el que muchas personas pasan gran parte de su tiempo y, por tanto, se alimentan, habría que repensarlo desde cero. Esto implicaría modificar la forma en que circulan los alimentos (de dónde provienen, cómo se transforman y presentan para el consumo), los residuos que generan (compostaje de la materia orgánica producida, disminución drástica de las fracciones plástica e inorgánica de los residuos) y qué personas o proyectos están detrás de cada una de estas fases, priorizando en los pliegos de condiciones las agroecológicas, locales, de pequeña escala, colectivas o pertenecientes a la economía alternativa y solidaria, dejando de lado el dinero como único criterio y garantizando un precio justo que permita unas condiciones dignas para todas las personas implicadas. Con ello, además, se conseguiría una pequeña diversificación de canales de venta para los proyectos productivos.

Con el fin de garantizar el acceso a una alimentación de calidad, junto a otras Administraciones públicas, se podrían ofrecer becas para una alimentación sana, financiadas con un gravamen a productos poco saludables como las bebidas azucaradas o al kilometraje acumulado de los alimentos.

Por último, y teniendo en cuenta la función de la comunidad universitaria como creadora y transmisora de conocimiento, se debería implicar a las escuelas y grupos de investigación relacionados con la alimentación en cualquiera de los aspectos anteriormente señalados, buscando el compromiso de todo el personal y del alumnado en su propia alimentación.

<http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/983989normalc.html>

Debates críticos y multidisciplinares sobre agroalimentación

Durante los últimos años, en la Universitat Autònoma de Barcelona se está llevando a cabo un proyecto encaminado a promover debates sobre el sistema agroalimentario.

La primera fase (2014-2016) consistió en organizar una serie de debates con profesorado y alumnado, por separado, con la finalidad de explorar cómo se percibe el sistema agroalimentario actual y en qué medida la soberanía alimentaria es una alternativa a tener en cuenta para paliar sus impactos negativos. Cada debate se iniciaba con una conferencia de una persona externa, invitada a hablar sobre el concepto de soberanía alimentaria y su relación con la temática propia de cada facultad en cuestión. Estos debates tuvieron lugar en las facultades de Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Empresa, Ciencias de la Educación, Letras, Ciencias, Biociencias, Medicina y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental.

La segunda fase (2016-2018) tenía el objetivo de introducir el debate en el aula mediante dos fórmulas. Por un lado, se generó un repositorio virtual de materiales sobre soberanía alimentaria y, por otro, se elaboró el pack didáctico «Alimentar Barcelona», que ofrece recursos y describe con detalle cómo realizar una visita guiada con estudiantes por diferentes espacios urbanos, con la finalidad de analizar críticamente cómo se alimenta la ciudad. A partir de la excursión, cada grupo hizo un trabajo de curso evaluable en sus respectivas asignaturas y con posterioridad se celebró una jornada de intercambio en la que pudieron presentar sus resultados y debatirlos conjuntamente.

Los resultados muestran una serie de fortalezas del concepto de soberanía alimentaria, como su interdisciplinariedad intrínseca, su potencial para



Menú de temporada y proximidad, apostando por una transición alimentaria. Foto: Observatorio para una Cultura del Territorio

evidenciar vulnerabilidades sociales o su capacidad transformadora. Se detectan también una serie de debilidades que dificultan su aceptación en varios sectores académicos, como la supuesta idealización del campesinado, una consideración naïf y poco realista del consumo alimentario o su difícil encaje en una sociedad donde las clases populares son muy poco *soberanas* en general. Se observa también la dificultad de llegar más allá del profesorado y el alumnado previamente convencido de la necesidad de reflexionar sobre modelos agroalimentarios alternativos.

La tercera fase (2018-2020), en funcionamiento en estos momentos, consiste en la aplicación del pack didáctico «Alimentar Barcelona» a la totalidad de estudiantes de varias asignaturas de diferentes facultades del campus. Se trata de una manera de superar los límites de las anteriores experiencias, con un proyecto multidisciplinar de amplio espectro. En cada asignatura se prevé analizar cómo se alimenta una gran ciudad, sus impactos y consecuencias, para posteriormente compartir reflexiones y debates en una jornada multidisciplinar, abierta a toda la comunidad universitaria.

Todos estos proyectos se han coordinado en el grupo de investigación ARAG (Agricultura, Ramadería i Alimentació en la Globalització) y han contado con el apoyo económico de la Fundación Autònoma Solidaria y la colaboración de la *Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas*.

<http://universidadesdelatierra.org/>

FRUTA CON JUSTICIA SOCIAL



cambiar el modelo para recuperar la vida

Gemma Casal Fité

La fruta dulce que inunda los campos de la llanura de Lleida se ha convertido en los últimos años en un producto de amarga producción. Se recogen miles de toneladas de fruta fundamentalmente para la exportación. En algunos casos, cuando el precio cae y ni siquiera se puede recuperar el costo de producción, se tiran toneladas de producto para mantener un precio que permita sobrevivir a las personas productoras. Detrás de cada pieza de fruta, hay una mano que la ha recogido del árbol y la ha transportado hasta las cámaras frigoríficas y de embalaje, una persona que trabaja en condiciones muy duras y que apenas puede sustentar su propia vida.

La amarga existencia de la fruta dulce

La recogida de la fruta dulce en Lleida necesita cada verano de la incorporación de entre 22.000 y 28.000 personas. Históricamente eran mujeres y jóvenes estudiantes de las localidades próximas quienes obtenían trabajo remunerado durante unos meses en verano, pero en las últimas décadas solo una pequeña parte de la demanda se cubre con mano de obra local. Sus puestos han sido sustituidos por hombres y mujeres inmigrantes provenientes de distintos puntos del Estado español, una población que hace años que es parte imprescindible de la ciudadanía, pero que sigue sin obtener los mismos derechos que el resto.

El convenio agrario obliga, entre muchas otras cosas, a facilitar alojamiento a las personas

trabajadoras que tienen su hogar a más de 75 kilómetros de su puesto de trabajo, pero esto no se cumple en muchas ocasiones y nos encontramos con que cerca de 2000 personas duermen en las calles de Lleida, en los márgenes de los campos, en campamentos en condiciones inhumanas, en alguna mina abandonada o en casetas ruinosas que se extienden entre los frutales. Personas que trabajan de sol a sol y a las que ni siquiera se les facilita un lugar donde dormir, agua potable o acceso a una alimentación digna. Es cierto que la gran mayoría de la población temporera es alojada según el convenio de trabajo y la mayoría de las personas agricultoras cumple con el salario estipulado, un precio ridículo como ridículo es también el precio de la fruta. Pero 2000 personas sin techo es un trance vergonzoso que vulnera los

“ La campaña de sensibilización «Silencio, temporeros durmiendo en las calles» se difundió en balcones del centro histórico de Lleida. ”

derechos humanos fundamentales y al que hay que plantar cara. No es gratuito que sean inmigrantes, mayoritariamente de origen africano y con una larga trayectoria de explotación en sus espaldas en otros campos como Huelva, Murcia o Valencia.

La Plataforma Fruita amb Justícia Social nace en 2018 como la materialización de la unión de organizaciones y colectivos por los derechos humanos. En 2015, organizaciones leridanas, impulsadas por La Crida per Lleida, iniciaron la campaña Fruita amb Justícia Social para denunciar la falta de recursos públicos, la desatención a las personas temporeras que dormían en las calles, la vulneración de derechos laborales y el racismo patronal e institucional, así como la depredación de recursos naturales —agua y tierra— destinados a un modelo agrario insostenible, que empobrece a las familias agricultoras (*pagesia*), desmantela el territorio, aumenta la explotación laboral y provoca la pérdida de los mercados locales y de la propia soberanía alimentaria.

A lo largo de cuatro años de trabajo con las personas temporeras, se ha podido recorrer el camino de la explotación, así como conocer organizaciones que en otros contextos trabajan por la defensa de este colectivo: el Sindicato Mantero de Barcelona (muchos de sus miembros han vivido la

explotación en los campos de Lleida), Càrnies en Lluita (en defensa de las condiciones laborales de los mataderos de la zona de Osona, en su mayoría inmigrantes), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (zona de la que provienen buena parte de quienes llegan a trabajar a la fruta leridana), Tanquem els CIES, que se encuentran en la primera línea de defensa de las personas inmigrantes o la Tancada per Drets de Barcelona, donde el colectivo inmigrante se autoorganiza para la defensa de sus derechos fundamentales. En el ámbito local se han unido esfuerzos con la Coordinadora de ONGD y otros movimientos solidarios, como Assembla Pagesa, que agrupa a agricultores y agricultoras con modelos alternativos de producción y comercialización, y con otras organizaciones sindicales y de derechos humanos.

La insostenibilidad del modelo agrario: la pérdida de la soberanía alimentaria

En la década de 1980, los campos de la zona de Lleida, bañados por el río Segre, vivieron una auténtica transformación. La zona de la Plana de Lleida tiene una huerta rica y prolífica, documentada ya en las épocas romana y musulmana, donde se construyeron un sinnúmero de canales y acequias para facilitar el riego y favorecer mejores cosechas. Esta huerta se mantuvo a lo largo de los siglos como una tierra fértil, el granero que abastecía la ciudad de Lleida y los pueblos de la comarca del Segrià: verduras y múltiples variedades de frutas, acompañadas de una ganadería menor que permitía la soberanía alimentaria de un vasto territorio.



Movilización de la campaña Fruita amb Justícia Social. Foto: Llibert Rexach





Asamblea con personas temporeras y sociedad civil. Foto: Llibert Rexach

En los años sesenta, se introdujo el cultivo de manzanas de manera intensiva, la fruta abrió un mercado hasta entonces desconocido y los beneficios económicos permitieron a la pequeña agricultura familiar encontrar un filón de ingresos que mejoraba ampliamente los beneficios conseguidos hasta ese momento. Así, en poco más de 20 años, desaparecieron los policultivos y la pequeña ganadería. La huerta dejó de producir verdura, cereales o forraje, como también dejó de producir distintas variedades de frutas locales para adaptarse a las escasas formas y tipologías de manzanas, peras y fruta de hueso que requería el mercado de exportación.

La zona del Segrià se mantuvo como una de las más dinámicas en la economía agraria, y a diferencia de otras zonas de Catalunya donde las pequeñas explotaciones agrarias familiares cerraban sus puertas y expulsaban mano de obra hacia las zonas urbanas, aquí el crecimiento económico permitió mantener una población agraria activa y dinámica hasta hoy.

En la década de los ochenta la llanura de Lleida ya disponía de una enorme infraestructura agraria dedicada casi exclusivamente a la exportación. Las fincas habían arrancado las antiguas variedades de frutales y plantaban las recomendadas por los adalides de la tecnología agraria. El Insitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaria del Govern se instalaba en la ciudad de Lleida y con él, el desarrollo de una línea de investigación sobre la mejora e innovación en frutales y técnicas de refrigeración de la fruta, que promovió la aparición de nuevas variedades como las nectarinas

o los paraguayos, así como tamaños, colores y olores que favorecían el consumo y el transporte a tierras lejanas. Evidentemente, la innovación tecnológica acompañó el despliegue de grandes empresas comercializadoras que aniquilaron el mercado local y que dejaron sin demasiado margen de maniobra a las cooperativas agrarias de la zona.

Con todas estas novedades, también aumentó la necesidad de mano de obra. Fue el momento en que las mujeres rurales se

incorporaron al sector servicios y abandonaron los trabajos temporales del campo y cuando los y las jóvenes estudiantes buscaron otras ocupaciones veraniegas más allá de la dureza de la campaña frutera. Y en ese contexto, llegó la población inmigrante, primero fundamentalmente hombres, con una ley de fronteras y de extranjería que facilitaba su incorporación inmediata a un mundo laboral extremadamente precario y sin ninguna protección, una mano de obra que necesitaba recursos y no exigía derechos. Ellos fueron la fruta dorada de la agroindustria en Lleida y de todas las campañas agrarias del Estado español.

Acaparamiento de tierras

La entrada en el nuevo siglo vino acompañada de la especulación en el sector agrario. Empresas de la construcción, de la aeronáutica o de cualquier sector con dinero, empezaron a comprar tierras, crear empresas de trabajo temporal o invertir en la agroexportación. Las familias agricultoras perdieron completamente la capacidad de autogestión de sus tierras y se vieron obligadas a cumplir los dictados del mercado y a aceptar los bajos precios ligados al consumo ruso, árabe, nórdico o chino. Las empresas viveristas encontraron un filón en la producción constante de nuevas variedades y se entró en una vorágine de arrancar y plantar árboles cada pocos años. Un sistema perfecto de consumo de insumos y escasos beneficios.

Paralelamente, el Govern se lanzó a crear la mayor infraestructura hidráulica del siglo, el canal Segarra-Garrigues, que regaría una amplia

zona de secano limítrofe a la zona frutera. Las familias agricultoras, en su gran mayoría, se han visto incapaces de asumir el costo de acceso al agua y las grandes empresas fruteras han encontrado dónde ampliar su negocio, creando miles de hectáreas nuevas de frutales que dejan en situación crítica a quienes mantienen la producción de fruta a pequeña escala, incapaces de competir con la gran agroindustria de la especulación.

El eslabón más débil pero imprescindible de todo este engranaje son las personas temporeras. Sin ellas no hay fruta que embalar y exportar. En estos momentos es factible una agricultura sin agricultores, pero no sin mano de obra que recoja una a una la fruta de los miles de hectáreas leridanas. Hombres y mujeres que han sufrido la expulsión de sus tierras por el empobrecimiento económico y múltiples violencias —entre ellas las causadas por grandes empresas de la agroindustria— se arriesgan a cruzar el Mediterráneo en busca de un lugar seguro que permita la sostenibilidad de la vida. En el Estado español encuentran de nuevo vulnerados sus derechos fundamentales. Son una enorme masa de nómadas que sobreviven de campaña en campaña: de la fresa de Huelva a la fruta dulce de Lleida, de la vendimia de La Rioja a la de los cítricos del Levante o a la de los ajos en Castilla-La Mancha. Miles de toneladas de comida que producen hambre y miseria, que empobrecen la capacidad productiva de la tierra y que no alimentan a los mercados locales.

Las demandas para la recuperación de derechos humanos y de la tierra

La campaña Fruita amb Justícia Social ha centrado sus esfuerzos en poner en el centro la dignidad de las personas temporeras y la supervivencia de la agricultura. La unión de los diferentes colectivos fomentó una lluvia de propuestas para avanzar en derechos e impulsó una recogida de fondos a través de una plataforma de micromece-nazgo. Los 2370 € conseguidos se utilizaron para la campaña de sensibilización «Silencio, temporeros durmiendo en las calles», que se difundió en balcones del centro histórico de Lleida; también se facilitaron alimentos y material para la pernoctación a las personas temporeras. Y la mayoría de fondo irá destinado a la sensibilización y promoción del sello de Fruta con justicia social.

Se ha trabajado en tres ejes fundamentales: por un lado, en la denuncia de la política de fronteras, la ley de extranjería y el racismo en todos sus

agentes (social, patronal e institucional). Por otro lado, en la vulneración de los derechos laborales a personas con dificultades de sindicación, asociación y denuncia. Y, finalmente, en propuestas para un modelo agrario que recupere la soberanía alimentaria.

Una de las propuestas y exigencias que se han trasladado a la Conselleria d'Agricultura y a la de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya ha sido la creación de un sello de calidad que garantice los derechos laborales y sociales de las personas temporeras e inmigrantes. Asimismo, se pide un cambio en la forma contractual que permita su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social y acceso a la protección por desempleo, entre otras prestaciones. Al Gobierno español se le pide que facilite documentación a las personas que no tienen regulada su situación administrativa y lo haga por arraigo laboral.

A la patronal agraria se le exige algo tan básico y fundamental como es el cumplimiento del convenio agrario y facilitar un techo a quienes trabajan de sol a sol en sus fincas, así como el cumplimiento del pago de horas extras y el respeto del descanso semanal. Las administraciones deben dar apoyo con la creación de albergues en los pueblos, para que las pequeñas fincas no tengan que crear una nueva infraestructura.

Y, por último, aunque pueda percibirse como una quimera, creemos fundamental la promoción de un nuevo modelo de agricultura que favorezca la agroecología y el consumo de proximidad. Solo esto puede facilitar la supervivencia de las fincas agrarias, la dignificación de la vida de las personas temporeras y la sostenibilidad de la tierra.



Gemma Casal Fité
Antropóloga y miembro de la
Plataforma Fruita amb Justícia Social



El audiovisual como herramienta de lucha

RED TZ'IKIN: REALIZADORAS INDEPENDIENTES DE GUATEMALA

El nombre de nuestra red, Tz'ikin, significa pájaro. Es un día del calendario maya que simboliza el pájaro sagrado Q'uq'umatz, comunicador entre lo sobrenatural y lo terrenal, entre el cielo y la tierra. Es el pájaro guardián de las tierras del área maya. Es la libertad, el mensajero, la suerte, el tesoro, lo terrenal y la conciencia global. Representa la visión sagrada y también la bonanza material, por tanto, la plena realización humana.

La Red Tz'ikin es una comunidad de realización audiovisual alternativa, de comunicadoras y comunicadores, así como colectivos y grupos de video comunitario provenientes de pueblos originarios mayas y ladinos de Guatemala. A partir del 2012, hemos intensificado la coordinación y el debate sobre las necesidades, potencialidades y retos del cine y el video social en Guatemala; ya que por medio de este tipo de trabajo hemos podido aportar en la transformación social de Guatemala, en especial en las comunidades en las que se llevan a cabo procesos de capacitación, producción y sobre todo de difusión.

Comunidades olvidadas por el Estado

Desde su nacimiento, el trabajo de Red Tz'ikin se ha enfocado en 3 áreas: difusión, capacitación y producción del audiovisual y cine comunitario o social. Nuestro trabajo se enfoca principalmente en las comunidades más vulnerables, olvidadas por el Estado y con alto índice de problemática social, donde se encuentra la lucha de los pueblos por la defensa de la vida y el territorio.

La Muestra de Cine y Video En Defensa de la Vida y el Territorio es

Red Tz'ikin

una plataforma de difusión del cine comunitario y alternativo de Guatemala y Latinoamérica, cuyo objetivo es llevar el cine a las comunidades más alejadas y sin acceso a estos materiales, además de contraponer las realidades locales con las luchas y logros de otras comunidades de Guatemala e incluso de otros países. Se han realizado 300 proyecciones en comunidades, centros educativos, cines, teatros y espacios públicos del área rural principalmente, llegando a un público aproximado de 45.000 personas.

Junto a esta Muestra, se han realizado procesos de capacitación de cine y video comunitario donde nuestro principal objetivo es dotar a jóvenes y mujeres de distintas comunidades del país de las herramientas oportunas para hacer cine

y video desde sus comunidades, con sus propias visiones, destacando su cultura e idioma y sobre todo para denunciar y sacar a luz pública los procesos de reivindicación y defensa de la vida y el territorio. En total, desde el inicio de nuestra labor, hemos organizado más de 25 talleres de formación donde se ha capacitado a 135 jóvenes y se han producido más de 40 cortometrajes entre ficción, reportajes y documentales.

En 2015, iniciamos la producción de un programa de televisión llamado *Tz'ikin TeVé*, su *Televisión Comunitaria*, el cual busca ser una ventana de exhibición audiovisual de trabajos realizados por integrantes de la Red Tz'ikin donde se difunden temas actuales con un enfoque comunitario. En poco más de un año, realizamos 14 programas de aproximadamente 30 minutos cada uno, con la participación de jóvenes que fueron parte de los procesos de capacitación de Red Tz'ikin. Los programas de Tz'ikin TeVé han sido muy apreciados tanto en el área urbana como en las comunidades rurales, donde llegamos a través de la señal de internet,



Foto: Red Tz'ikin



Proyecciones audiovisuales en las comunidades. Foto: Red Tz'ikin

por medios locales de televisión municipal o por muestras de cine y video que organizamos en las propias comunidades. El potencial de este tipo de programas es enorme, sin embargo, por falta de fondos, no han podido continuar.

Descolonización de los medios audiovisuales

El trabajo de Red Tz'ikin es una apuesta por la descentralización, democratización y descolonización de los medios televisivos y la producción audiovisual en Guatemala, ya que el acceso de los pueblos indígenas y comunidades campesinas más alejadas y con menos posibilidades a la producción audiovisual es nulo; no existe una televisión pública, ni espacios adecuados de proyección de cine comunitario ni alternativo.

La Red Tz'ikin ya ha acumulado una interesante experiencia, donde, a pesar de las dificultades, hemos podido desarrollar multitud de acciones. Recientemente, junto con la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los

Pueblos Indígenas (CLACPI), organizamos en Guatemala del 13.º Festival Internacional de Cine y Comunicación Indígena (FICMAYAB' 2018) en el que durante 15 días se proyectaron infinidad de muestras de cine y actividades artísticas en teatros, plazas, universidades y comunidades de Totonicapán, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, El Estor, Cobán y Chisec en Alta Verapaz.

La comunicación comunitaria e indígena con énfasis en la capacitación, producción y difusión audiovisual es muy importante para el desarrollo de los pueblos en Guatemala y

debería realizarse un esfuerzo mucho mayor por parte de entidades privadas y estatales para apoyar estos procesos de comunicación alternativa, donde los actores de cambio puedan ser personas jóvenes empoderadas con herramientas de producción audiovisual.

Los retos son muchos. Nos gustaría poder impulsar una segunda temporada de Tz'ikin TeVé, con la participación de más compañeras y compañeros, mejores equipos y lograr mayor difusión en las regiones para poder consolidar una audiencia local, nacional e internacional. Nos gustaría así poder contribuir a lograr un país con mayor participación en la producción de contenidos audiovisuales desde las comunidades, donde se valore la producción audiovisual en idiomas mayas y se consigan espacios de participación para jóvenes con enfoque diverso. Todo ello para lograr un cambio en la realidad nacional.

Red Tz'ikin

Este artículo está apoyado por la ONGD Farmamundi, en el marco de su programa de protección de defensores/as de derechos humanos en Guatemala y El Salvador, financiado por la ACCD.

PARA SABER MÁS

—Red Tz'ikin: <http://www.realizadorestzikin.org/>

—Tz'ikin TeVé: <http://www.teve.realizadorestzikin.org/>

—FicMayab' 2018: <http://www.ficmayab.org/>

VISITAS
DE
CAMPO

Sin molinos no hay soberanía

LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO SPIGA NEGRA

En el año 2015 mi hermano Igor y yo comenzamos la andadura de Spiga Negra, un molino ecológico y obrador de pasta artesana que trabaja exclusivamente con ingredientes locales. Sin embargo, nuestro viaje había comenzado mucho antes. Somos de una zona del País Vasco en la que el cultivo del cereal era algo muy tradicional. No obstante, como en muchos otros lugares, está desapareciendo o se ha convertido en un monocultivo enfocado principalmente a la alimentación animal o a la elaboración de harinas para la gran industria.

¿De dónde surge la idea?

Motivados por la nostalgia que nos producía el recuerdo de los trigales del pueblo, decidimos investigar por qué el cereal, en concreto el trigo, estaba sufriendo tal retroceso y por qué era un cultivo cada vez más denostado.

Dar valor al cereal de pequeñas y medianas producciones en venta directa o canales de proximidad resulta muy complicado sin una previa transformación en harinas o sémolas.¹ Además, en muchas comarcas ya no existen molinos en activo

1. La sémola que se obtiene al moler el trigo duro (*Triticum turgidum durum*) es más gruesa que la harina, por lo que el proceso es distinto al de una molienda para obtener harinas (más habitual). Es la base con la que se elaboran las pastas clásicas y su calidad depende en gran medida de la variedad de trigo, de su manejo durante el cultivo, del cuidado durante todo el proceso de selección de granos y del diseño de la molienda.

o los que hay son grandes plantas transformadoras que demandan grandes volúmenes, por lo que para obtener un mínimo de rentabilidad, hay que concentrar cada vez más hectáreas y producir cantidades mayores.

Si observamos los productos ecológicos derivados de cereales que llegan a nuestras cestas, asociaciones de consumo o comercios, es prácticamente imposible conocer el origen real de los granos con los que se han elaborado las harinas que posteriormente se transforman en panes, galletas, etc. En el caso de la pasta es todavía más difícil ya que al desconocimiento del origen del cereal, hay que sumar que la inmensa mayoría de las pastas *bio* son de producción industrial y de baja calidad.

Finalmente, aprovechando que mi hermano tenía que desarrollar su proyecto de fin de carrera y yo disponía de algo de tiempo para centrarme en el estudio de la parte agraria y de los procesos



Comprobando la calidad del grano para la cosecha. Foto: Spiga Negra

de elaboración, nos pusimos a dar forma a todas esas ideas. El resultado fue el diseño sobre papel de una pequeña semolera para abastecer a un obrador artesanal de pasta. Después de hacer algún número y con una enorme dosis de inconsciencia decidimos ponernos manos a la obra y a la masa. De ahí surgió Spiga Negra.

Desde que comenzó nuestra andadura trabajamos mano a mano con Juan y Máximo Rodríguez (dos de los precursores de la agricultura ecológica en Andalucía y referentes en el movimiento agrario), cuya finca se sitúa a unos 15 km de nuestro molino. Producen, principalmente, hortaliza ecológica, miel y algo de olivar, y desde hace 4 años intercalan en sus rotaciones nuestro trigo duro y trigo espelta. Gracias a esta relación directa podemos utilizar nuestras propias semillas, establecer acuerdos y precios dignos y recuperar variedades que habían quedado en el olvido. De igual forma, estamos consiguiendo que nuestra pasta esté realmente vinculada al territorio y, además, podemos controlar la calidad del producto desde el cultivo hasta la elaboración final, un factor que nos diferencia.

Una mirada global al sector de la pasta

Cuando hablamos de soberanía alimentaria en los cereales, además de semillas, de saberes campesinos y del buen hacer de los pequeños obradores locales, hay que hablar de molinos.

Actualmente, el sector harinero está muy concentrado, son pocos grupos empresariales los que engloban la mayor parte de las instalaciones transformadoras de trigo y otros cereales en harinas o sémolas. Según datos de la AFHSE (Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España), entre 2004 y 2016, cerró casi un 44 % de las

harineras. Por ejemplo: en Extremadura se pasó de 12 en 2004 a ninguna en 2016; en Andalucía, de 66 a 18; y en el País Vasco y Navarra, de 11 a 4. Los principales afectados fueron las harineras y los molinos más pequeños y locales, que no pudieron hacer frente a industrias de mayor escala, capaces de copar toda la demanda.

No obstante, el cierre de los molinos y el control de un sector tan estratégico había comenzado mucho antes. Durante el franquismo, y en especial en la época autárquica, el pan era un producto sometido a racionamiento, por lo que el campesinado estaba obligado a entregar parte de sus cosechas al Estado (a precios miserables) y los molinos y fábricas de harinas debían estar autorizados y tener cupos asignados. La situación de escasez de la época generaba un suculto mercado negro, por lo que el Servicio Nacional del Trigo² cerró muchos molinos para reafirmar su control sobre el sector. Sin embargo, estas acciones eran simbólicas ya que las redes clientelistas eran más que habituales y también se concedían cupos en exceso.

En los años sesenta, con la «apertura económica», se agudizó la crisis en el sector harinero. La capacidad productiva aumentó mucho, pero al mismo tiempo bajó la demanda de pan y muchas fábricas cerraron. Finalmente, aludiendo a ese desequilibrio entre la oferta y la demanda (originado por la deficiente gestión de organismos como el Servicio Nacional del Trigo, entre otros factores), el Gobierno franquista en 1973 incentivó³ el cierre de harineras, se estima que más de 1000 molinos se acogieron a la medida.

2. BARCIELA LÓPEZ, C., *Estudios de Historia Económica*, n.º 5, Banco de España. Madrid, 1981: «El Servicio Nacional del Trigo fue un organismo creado durante la guerra civil y que estuvo vigente durante la dictadura hasta que en 1968 que pasó a llamarse Servicio Nacional de Cereales (SNC). Su objetivo fue el control del comercio del trigo principalmente y regulaba las compras, las ventas y los stocks de este y otros cereales de primera necesidad. Funcionó como un monopolio comercial auspiciado por la dictadura que se encargaba de cobrar los beneficios originados por las importaciones de trigo y de otros productos cuyo comercio exterior quedase en sus manos por orden del Gobierno. También fue organismo responsable de imponer sanciones a los agricultores y comerciantes que incumpliesen la normativa triguera y sirvió como entidad de crédito para campesinos».

3. Decreto 2244/1973, de 17 de agosto, por el que se establece el Plan de reestructuración del Sector de Harinas Panificables y Sémolas, publicado en B.O.E n.º 227 del 21 de septiembre de 1973.

Tras este cierre masivo, muchas localidades e incluso comarcas enteras se quedaron sin instalaciones en las que transformar su cereal y actualmente la tendencia se mantiene. La concentración de la industria molinera iniciada durante la dictadura abonó el terreno para que el sector quedara repartido entre unos pocos grupos empresariales, familias o entidades financieras, que dejan poco margen de maniobra para el pequeño campesinado cerealista y un escenario opaco para la población consumidora y los pequeños obradores interesados en conocer qué es lo que hay detrás de las harinas que consumen. Además, favorece el comercio kilométrico y la especulación en los mercados de las materias primas, creando auténticas burbujas en los precios.

Según datos de Amigos de la Tierra, la media que recorren los cereales hasta nuestras mesas es de casi 3000 km, la mayor parte de los cuales corresponde al transporte de las materias primas, no de los productos terminados. En el caso del trigo duro para la elaboración de pastas, buena parte de las importaciones llega de América del Norte, por lo que la distancia se incrementa.

Respecto al sector semolero (con la elaboración de pasta como destino principal), está aún más concentrado, ya que según datos de la AFHSE únicamente existen 8 grandes instalaciones controladas por 5 grandes empresas. Varias de estas plantas han incorporado líneas ecológicas en los últimos años debido al aumento de la demanda de lo *bio* en el mercado.

Para romper con esta dinámica, en Spiga Negra nos propusimos desde el principio conocer el origen del grano y poder trabajar mano a mano con quienes lo producen. Para ello, tuvimos que diseñar un molino adaptado a nuestra escala y exigencias de calidad. Queríamos hacer buena pasta, al nivel de las mejores pastas artesanales que se pueden encontrar en algunos rincones de Italia; nuestro molino tenía que dar una buena sémola y respetar las cualidades de los granos.

Diseñar el molino semolero con nuestros recursos fue muy complicado. La maquinaria que se encuentra en el mercado no está adaptada a escalas pequeñas y mi hermano tuvo que hacer un gran esfuerzo para encontrar información y hacer un proyecto adaptado. Es más, todo se diseñó con base en bibliografía y teoría, y tuvimos que apoyarnos en publicaciones técnicas de inicios y mediados del siglo XX porque en los manuales actuales no se explicaban los principios

más básicos del oficio. La verdad es que fue una aventura que nos llevó a viajar y conocer a personas muy interesantes. Así que estamos muy orgullosos porque hemos conseguido elaborar buenas sémolas y harinas y nuestro obrador está directamente unido con el campo gracias al molino. Esto nos motiva a seguir adelante, a seguir curioseando y a intentar mejorar pese a las muchísimas dificultades a las que nos enfrentamos.

La importancia del consumo y la supervivencia de los proyectos

Aunque llevamos casi 4 años, actualmente el proyecto no es capaz de sostenerse económicamente. En total somos 3 personas con una carga de trabajo alta, vamos cubriendo costes y pagando préstamos, pero mi hermano y yo todavía no tenemos un ingreso económico regular y digno. Nuestros números están mejorando; no obstante, sin el apoyo familiar y de nuestro entorno no sería posible continuar.

En proyectos asociados a la transformación artesana de alimentos, cuando se pretende trabajar bajo unos criterios más éticos y elaborando alimentos de calidad, los gastos de producción se incrementan respecto a quien trabaja bajo la premisa de la producción a escala u obtiene sus materias primas de un mercado globalizado. Aun así, la mayoría de los artesanos y artesanas (al igual que ocurre en el sector agrario y ganadero) suelen intentar ajustar los precios al máximo para que sus productos no se conviertan en un bien de lujo.

El problema de este ajuste viene dado de una comparativa injusta. Por norma general, las personas consumidoras (también aquellas más concienciadas) e incluso algunas productoras, suelen



Secando tagliatelle. Foto: Nanomundo - Subbética Ecológica

Juan Piqueras Haba

Importancia de la organización y las redes: Subbética Ecológica

Si los proyectos artesanos agroecológicos queremos sobrevivir, tenemos que mejorar nuestras herramientas de comunicación y comercialización. Debemos visibilizarnos y mostrar que nuestros productos son diferenciados. A su vez, tenemos que perfeccionar nuestros canales comerciales, facilitar el acceso a nuestros productos y aumentar la distribución. Desgraciadamente, esto no es sencillo y suele ser una asignatura pendiente.

En este sentido, las redes son imprescindibles. Hace algo más de dos años, nos sumamos a la asociación de productores y consumidores ecológicos Subbética Ecológica, un interesante ejemplo de coordinación y cooperación que aglutina toda la cadena. Desde la central de pedidos, ubicada en Cabra [Córdoba], se coordina la producción para atender la demanda y se hace una oferta y distribución conjunta para la red de comercialización. La asociación se fundó en 2009 y desarrolla su actividad en la comarca de la Subbética cordobesa y, por extensión, en el centro de Andalucía.

Subbética Ecológica tiene como finalidad trabajar en pro del desarrollo sostenible, basándose en los recursos, las personas y la identidad cultural de su territorio, teniendo en cuenta la responsabilidad social, medioambiental y económica del espacio rural en que surge. Este trabajo está generando una auténtica alternativa a los canales convencionales, ya que aglutina más de 40 proyectos productivos diversos (hortalizas, pan, pasta, frutas, aceite, queso, huevos, carne, etc.), más de 400 familias consumidoras y más de 60 empresas (restaurantes, comedores escolares, comercio local, etc.)

<http://www.subbeticaecologica.com/>

tomar como base el precio habitual de mercado del alimento, sin tener en cuenta muchos otros factores. El caso de la pasta ecológica es un ejemplo sencillo de entender. El mercado ofrece innumerables marcas, todas con su certificado, pero en su gran mayoría son de producciones industriales a gran escala que difícilmente sabrían ubicar los campos en los que ha crecido su cereal, y mucho menos reconocer a quienes los han cultivado. Pocas personas son capaces de distinguir entre las implicaciones que tiene elaborar a gran escala (aunque sea *bio*) o de manera artesanal. Por ende, asumen que el precio de estos últimos no debe ser mucho mayor. Ninguna de las pastas artesanales que conozco tiene precios inalcanzables, al fin y al cabo, es un alimento básico; pero al hacer la comparativa con la industrial utilizando como único criterio el monetario, el resultado es negativo y puede llevar a un buen número de proyectos artesanos a marcar márgenes demasiado ajustados condenándolos a una precariedad que, por desgracia, es habitual en pequeños proyectos productivos, iniciativas colectivas, etc.

Quienes producimos de forma artesana necesitamos que se consuman los alimentos que producimos, para eso los elaboramos con tanto mimo y esfuerzo. Sin un apoyo más efectivo desde el consumo, no tenemos sentido. Tenemos que volver a ser capaces de apreciar los sabores y saberes locales, afinar los paladares y buscar elaboraciones de calidad. De esta manera, seguramente tendremos más salud y apoyaremos a más proyectos vinculados al territorio que, perdiéndonos en debates estériles o siendo presas de la última moda *healthy*, que casualmente, suele demonizar alimentos locales y tradicionales ensalzando nuevos ingredientes desconocidos con halo millenario, habitualmente lejanos y comercializados bajo las lógicas más agresivas del mercado y la agroindustria.

Arrate Corres Velasco
<http://spiganegra.com/>

CITRICULTURA VALENCIANA

¿CRISIS COYUNTURAL O FIN DE CICLO?

Estos meses se está escribiendo mucho sobre la crisis de los cítricos valencianos. Para complementar los análisis realizados en los medios de comunicación de actualidad, repasamos el origen y la evolución del monocultivo cítrico, una forma de generar divisas que podría empezar a cuestionarse en el momento en que desplaza a los cultivos básicos e impide prácticas agrarias alternativas. ¿Qué puede aprenderse de este largo ciclo?

Después de haber sido durante siglo y medio la principal fuente de riqueza para la agricultura valenciana de las zonas de regadío, la citricultura parece haber entrado en una fase de final de ciclo económico, con una caída continuada de los precios pagados en el campo que hacen totalmente ruinoso su cultivo a pequeña e incluso mediana escala. La crisis es tan grave que en la actual campaña 2018-2019 muchas fincas dejan que sus mandarinas y naranjas se pudran en los campos. Entre las causas, se señala en primer lugar la importación por parte de la Unión Europea de mandarinas procedentes de África del Sur, aunque resulta difícil entender que la introducción de menos de 200.000 toneladas, en un mercado donde solo el Estado español produce casi dos millones (el 70 % valenciano), pueda haber generado tal hundimiento en los precios pagados en origen (18 o 20 céntimos por kilogramo), cuando en los mercados europeos el precio de venta final sigue siendo hasta 10, 20 e incluso 30 veces más. ¿Cuánto ganan entonces los

agentes intermediarios, las cadenas de supermercados y las fruterías? La importación de mandarinas sudafricanas no ha hecho más que agudizar un problema que ya viene arrastrándose desde hace veinte años.

Los análisis señalan una larga serie de razones, tales como el exceso de nuestra oferta de cítricos, debido a las grandes plantaciones llevadas a cabo en Andalucía o el carácter minifundista de la mayoría de propietarios valencianos (la inmensa mayoría, hombres) frente a las grandes explotaciones andaluzas, llevadas a término por grandes empresas comerciales o por capitales procedentes de sociedades mercantiles, industriales, dinero negro o profesionales liberales con altos ingresos. También se señala la competencia de otras frutas que inundan los mercados en plena campaña naranjera. No deja de sorprendernos que incluso en Valencia se prefiera comprar en invierno uvas del Perú, kiwis de Nueva Zelanda o piñas de Costa Rica, antes que naranjas y mandarinas valencianas, aunque estas sean mucho más baratas.

Otras razones son de tipo político y organizativo, como invocan quienes recuerdan el gran papel que en décadas pasadas interpretaba el llamado Comité de Gestión de Cítricos, ahora desaparecido, tanto en la regulación de la oferta y la demanda como en las conversaciones con las autoridades europeas.

La agricultura valenciana de exportación y sus ciclos

El historiador Ricardo Abad acuñó en 1980 el apelativo «fruta dorada» alusivo no solo al color de su piel, sino también al dinero (oro) que reportaba. Pero como tantos otros productos en la historia de la agricultura valenciana, también la naranja ha cumplido seguramente ya su ciclo hegemónico y conviene prepararse para otro nuevo.

Es importante recordar que la valenciana viene siendo desde el siglo XV una agricultura de exportación y que los cultivos han ido cambiando a medida que lo pedía el mercado. Así, a finales del siglo XV, los mercaderes flamencos, alemanes, británicos, franceses e italianos que operaban en Valencia y Alicante, se llevaban de aquí azúcar, seda, arroz, pasas, vino, azafrán, etc. El azúcar, obtenido de las cañas que cultivaba

la población musulmana desde la Plana de Castellón hasta la Safor (Gandía y Oliva) fue el principal producto de exportación durante los siglos XV y XVI, hasta que la competencia del azúcar de Canarias y de América, ayudada por el cambio climático (la Pequeña Edad del Hielo) y la expulsión de los moriscos en 1609, acabaron con ella. Le sucedió entonces en los regadíos la morera, «el árbol de la seda», porque con sus hojas se alimentaban los gusanos que producían el carísimo y cotizado hilo. La seda bruta e hilada se exportaba a Francia e Italia, sumado a la demanda interna de los tejedores de Valencia, Requena, Toledo y Talavera. La seda fue la principal mercancía exportada entre el 1700 y 1840, seguida por las pasas, los vinos y el aguardiente. En la segunda mitad del XIX, el viñedo representó más de la mitad del valor de todas las exportaciones valencianas, hasta que a partir de 1910 se iría sustituyendo por el naranjo en las comarcas litorales. El arrozal, por su parte, incrementó su extensión de poco más de 10.000 ha en 1800 a 30.000 en 1920, ocupando gran parte de los regadíos de Alzira, Xàtiva, la Vallidigna y la Safor, donde a partir de 1955 sería sustituido por el naranjo.



Mural de Xoana Almar y Miguel Peralta (2017), en Monforte (Lugo). Foto: Cestola na Cachola

Naranjas antifascistas

«Actualmente queda en los árboles del 35 al 40 % de la cosecha de la naranja por recoger, hay pendiente de cobro en el extranjero docenas de millones que podían revertir al Estado y como no puede dejar que se hunda definitivamente la exportación de la naranja, nosotros nos atrevemos a proponer que el Gobierno intervenga inmediatamente en el organismo exportador CLUEA».

Con esta carta dirigida a Largo Caballero, el 23 de marzo de 1937, la ejecutiva nacional de la UGT consiguió poner fin, como quería, a la experiencia de colectivización promovida por la CNT y la propia UGT valencianas. El Consejo Levantino Unificado de la Exportación Agrícola, creado en octubre del 36 y bajo control anarquista, pretendía controlar la totalidad de las divisas procedentes del mayor producto de exportación del momento, la naranja, en favor de sus propuestas revolucionarias y para evitar el avance fascista. La experiencia de esa campaña de colectivización, en términos económicos, fracasó, tanto por las propias obstrucciones del gobierno como por las tensiones con los propietarios, los problemas de transporte en un país en guerra y una sobreoferta de naranjas en Europa derivada de la producción palestina.

Tanto por reforzar el mito de la exportación como por hacer fracasar las colectivizaciones, cabría preguntarse cuánto pudo influir esta experiencia en el devenir del cooperativismo del sector, en la actualidad concentrado en Anecoop, una cooperativa de cooperativas convertida en el mayor exportador de cítricos del mundo y siempre al servicio de la Gran Distribución.

Revista SABC

El primer ciclo expansivo del naranjo 1850-1930

Aunque el naranjo era ya un árbol habitual en los campos valencianos del siglo XVI, cuando todos los años por Navidad solían mandarse a la Corte (Madrid) carretadas de naranjas, granadas y turrónes, su cultivo regular no empezó a producirse hasta finales de siglo XVIII de la mano de propietarios ricos de Carcaixent, Alzira (la Ribera) y Borriana (la Plana). Se trataba de personas con otros ingresos no agrícolas y con capital suficiente como para transformar tierras de secano en regadío, mediante pozos noria. Hasta 1850, el mercado estuvo restringido al interior, ya que era Portugal el principal exportador a Gran Bretaña, en proceso de industrialización y urbanización. La ruina de los naranjos portugueses debido a una plaga durante la década de 1840, desvió la atención del mercado británico hacia Valencia, y las exportaciones crecieron vertiginosamente de menos de 9000 t en 1861 a casi 90.000 en 1880.

Posteriormente, se sumaron las compras de Francia, Alemania y Países Bajos, y las ventas superaron las 400.000 t en vísperas de la Primera

Gran Guerra (1914-1918) que supuso una fuerte regresión, para alcanzar durante los «felices años veinte» el millón de toneladas en 1930. La Gran Depresión iniciada en 1929 y luego la Guerra Civil española y la Segunda Gran Guerra y sus secuelas, significaron una larga etapa (1931-1955) de estancamiento para el sector citrícola.

Al calor del negocio fueron muchos los capitales urbanos (industriales, comerciantes, profesionales liberales) que invirtieron en la compra de tierras para plantar naranjos, abriendo pozos con poderosos motores importados de Alemania y construyendo de paso soberbias mansiones como símbolo de la nueva riqueza.

La segunda expansión y el fin del ciclo: 1955-2018

La recuperación vendría pareja al «milagro alemán» y el crecimiento económico de Europa Occidental a partir de los años cincuenta, con la creación del Mercado Común en 1957. El Estado español firmó en 1958 ventajosos acuerdos comerciales con los países del Mercado Común, que mejoraron mucho en 1986 tras nuestro ingreso en el mismo y que alcanzaron su mejor momento

“ Al calor del negocio, fueron muchos los capitales urbanos que invirtieron en pozos y tierras para plantar naranjos. ”

en 1993 con la creación de la Unión Europea y su mercado único, sin aranceles ni impuestos. La demanda europea de naranjas volvió a crecer y con ello las exportaciones, que volverían a rebasar el millón de toneladas en 1970, aumentando luego a 2,2 millones en 1996 y llegando a 3,3 millones en 2010, cuando gracias a su posición ventajosa tanto arancelaria como geográfica, nuestro país acaparaba el 70 % de la cuota del mercado importador cítrico de la Unión Europea, frente a otros competidores internos (Italia o Grecia) y externos (Marruecos, Israel-Gaza o Sudáfrica).

Aquel *boom* exportador de los años setenta, acompañado de la entrada de los insumos químicos en la década anterior, fomentó las nuevas plantaciones, en las cuales, ahora sí, la huerta tradicional y muchos arrozales fueron invadidos por naranjos y mandarinos, participando activamente también los medianos y pequeños propietarios, dibujando así una citricultura cada vez más minifundista. Las exportaciones en barco, mayoritarias en la etapa anterior, empezaron a ser sustituidas por el ferrocarril y finalmente por camiones frigoríficos, con una alta participación de empresarios valencianos. Lo mismo pasó con los agentes comerciales, antes en abrumadora mayoría británicos, alemanes y franceses, a quienes ahora harían y hacen competencia valencianos y murcianos. Los beneficios fueron muchos y muy repartidos.

La expansión del naranjo volvió a ser fulgurante e incluso superó con creces a la etapa anterior: entre 1955 y 2000 se plantaron en las comarcas del golfo de Valencia más de 100.000 ha de naranjos y mandarinos, avanzando tanto sobre las huertas de los regadíos históricos como sobre los secanos interiores (viñedos, algarrobos, olivos) transformados en regadío con miles de pozos y transvases de ríos. Al llegar a su máxima expansión, en 2005, el territorio valenciano sumaba

190.000 hectáreas de cítricos. En Murcia y en las provincias andaluzas de Córdoba, Sevilla y Huelva, se habían llevado a cabo enormes plantaciones de naranjos que no cesarían de aumentar hasta el momento actual.

A partir del año 2000, cuando la producción seguía aumentando, las exportaciones empezaron a estancarse. La saturación de los mercados interior y exterior ha sido palpable en estos últimos años, con la consiguiente caída de los precios y sin previsión de mejora mientras en Andalucía se sigan haciendo nuevas plantaciones y Europa autorice la importación de cítricos de terceros países (Sudáfrica, Argentina o Marruecos).

Un nuevo ciclo, de nuevo con monocultivos de exportación

Ante esta saturación, en Valencia ya hace tiempo que se empezó a apostar por el caqui, la granada, el paraguayo, el aguacate e incluso el kiwi. El caqui ha sustituido al naranjo (y lo sigue haciendo a marchas forzadas) en una de las cunas de la naranja (la Ribera del Xúquer), y ya hay plantadas casi 20.000 hectáreas (más del 80 % de la superficie estatal). Los granados ocupan otras 4000 (de un total de 5400); paraguayos, aguacates y kiwis son todavía minoritarios, pero están llamados a regenerar la agricultura valenciana. Estas transformaciones las están protagonizando de momento la pequeña y mediana agricultura que vive de trabajar directamente sus tierras. Se plantan muy pocos naranjos, como no sea en grandes fincas propiedad del capital comercial.

Todo apunta, pues, a que el ciclo del naranjo ha acabado en Valencia y que el paisaje siempre verde de este árbol irá siendo sustituido por otros de hoja caduca que dibujan un paisaje marrón en el invierno, como ya sucede en los alrededores de Alginet, l'Alcúdia y Carlet, los tres principales productores de caqui. Si esto ocurre, también habrá un notable cambio en el medio ambiente, ya que los cítricos, con su hoja perenne, actúan como un gigantesco bosque que absorbe la radiación solar, suaviza las temperaturas, consume anhídrido carbónico y aporta oxígeno a la atmósfera. Los demás frutales ya no podrán cumplir estas funciones en la misma medida.

Juan Piqueras Haba
Catedrático Honorario de Geografía
Universitat de València

Choque de modelos agrarios

Frente al modelo de monocultivo cítrico, con los problemas sociales y económicos que conlleva y contrario por definición a la diversidad, en el País Valencià se han iniciado muchos proyectos agrodiversos y ecológicos que, sin embargo, se ven perjudicados por prácticas diseñadas para el modelo de cultivo dominante.

Desde 2002, las diferentes comunidades de regantes de las zonas cítricas de Castellón y Valencia aplican la llamada fertirrigación comunitaria, consistente en la adición de químicos de síntesis al agua suministrada para el riego por goteo. De acuerdo con la recomendación del Servicio de Tecnología del Riego del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), el argumento principal es mejorar la situación de la población activa del sector primario –que en estas comarcas supera la edad de jubilación en más del 40 % y cada vez tiene más difícil tratar de manera individual sus campos– y también hacer un «uso racional» de la fertilización sintética.

Las soluciones utilizadas en el proceso de fertirrigación, a base de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y algunos microelementos, no están permitidas en la agricultura ecológica, empobrecen las cualidades del suelo y son antagónicas, por ende, a los modelos agroecológicos. Sin embargo, se aplican de manera homogénea sin tener en cuenta la diversidad varietal, incluso de especies o edáfica de cada área irrigada. «Este agua sirve para cualquier cultivo» es el argumento que suelen esgrimir las comunidades de regantes.

En algunos casos, las comunidades de regantes plantean como solución destinar un día de agua «limpia» a la semana, cuando en realidad ese día supone más una limpieza de canalizaciones que un verdadero aporte de agua de calidad. Como organización agraria, somos conscientes de que un gran número de jóvenes que tratan de incorporarse a la agricultura con modelos agroecológicos, encuentran impedimentos a la hora de disponer de agua limpia para sus cultivos y se ven en la obligación de tomar medidas que comportan costes añadidos, como la construcción de balsas y otros mecanismos para depurar y almacenar agua para el riego. Además, en algunos casos el precio del metro cúbico de agua no tratada es igual al del agua fertirrigada, con el agravio comparativo que ello representa.

Paradójicamente, la ORDEN 11/2017, de 21 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se regula el proceso de selección de inversiones propuestas por las comunidades de regantes reza: «La inclusión de inversiones en fertirrigación comunitaria se considerará siempre que la fertirrigación colectiva no comprometa la práctica de la producción ecológica de aquellos agricultores que la apliquen», pero este es un punto que no se respeta. Además, el Gobierno valenciano lanzó durante la legislatura de 2015-2019, el Plan Valenciano de Producción Ecológica, que, además de contar con pocos medios para su ejecución se encuentra con impedimentos como el que supone la fertirrigación, que sí asegura ingresos a las empresas comercializadoras de fitosanitarios. Más allá de su supuesta eficiencia, es necesario contemplar de forma más amplia las posibles implicaciones del riego localizado en áreas como el litoral valenciano, como consecuencias negativas sobre la fauna y flora salvajes o poner en peligro un patrimonio hídrico que define este territorio.

Se evidencia, pues, que estos remedios puntuales perpetúan el problema. La búsqueda de modelos agrarios justos y ecológicos es acuciante y está cada vez más justificada.

Àrea d'Agroecologia de COAGCV

El acto político de comer

Jordi García

RESEÑA DE *COMER ES UN ACTO POLÍTICO*

«Por comodidad, por miedo, por costumbre. Deslumbrado por la suerte de haber podido, desde muy joven, hacer carrera en la gastronomía, me limité durante mucho tiempo a pensar en mí y a saciar mi ambición». Este era el pensamiento de Alain Ducasse, autor del libro *Comer es un acto político* (Txalaparta, 2018) y uno de los chefs franceses de más éxito —con más de 20 estrellas Michelin—, antes de hacer el cambio de mentalidad respecto al acto de comer que, según relata en las primeras páginas del libro, fue motivado por una accidente de helicóptero que le hizo replantearse la vida.

Es evidente que la Revolución Industrial penetró también en el acto de comer (producción, distribución, consumo...) y que, en nombre del progreso, se nos ha abocado a un modelo agroindustrial que no favorece ni a la mayoría de la humanidad ni al medio ambiente, y así lo denuncia el autor en el libro: «la agricultura productivista está sometida a la errática y especulativa ley de los mercados financieros, una ley ligada a la agroindustria,

que aspira a uniformizar los gustos y así optimizar sus costes mediante las economías de escala y la globalización de sus mercados masivos». Todo mientras «las élites políticas demuestran ser incapaces de ir más allá de sus intereses a corto plazo y se han distanciado de las realidades sociales y económicas de la población», añade.

Así, el discurso neoliberal alrededor del acto de comer ha cuajado y queda materializado culturalmente en las prácticas vitales de la sociedad, como en cualquier otro aspecto más. En este sentido, Ducasse denuncia que «comemos sin prestar atención a lo que comemos, puesto que lo hacemos rodeados de una tecnología que nos absorbe». También hay que destacar otro rasgo característico de la globalización y la sociedad de consumo: la abundancia, la idea de que todo lo que queremos lo tenemos a nuestro alcance, que la felicidad está en la cantidad, una falsa trampa que solo beneficia a aquellas personas que hacen negocio con el derroche de recursos y la salud de la gente y el planeta.

Y es que no somos conscientes de lo que comemos. Según el autor «la trazabilidad de los alimentos que ingerimos, su origen, su calidad, la manera en que se producen, se tratan y se cocinan son cada vez más opacos. Y esta preocupante opacidad destruye la conexión simbólica tan valiosa que se puede tener con la comida». Es decir, hay un interés por alejarnos del territorio, en general, y de la vida de los alimentos, en particular, para que no nos cuestionemos ciertas cosas y hacer negocio con nuestras vidas. Así lo demuestran algunos datos que aporta Ducasse, como que «el 35 % de los niños y las niñas de entre ocho y doce años no saben que el yogur se elabora con leche». También son alarmantes las cifras que se derivan del desconocimiento sobre el consumo alimentario. Como apunta Ducasse, «en 100 años, el consumo de azúcar por habitante se ha multiplicado por cinco en el mundo» y «la obesidad es la quinta causa de muerte prematura».

En este sentido, el autor defiende que comer sea un

acto político; por ejemplo, no comprar carne por su impacto ambiental y sobre los animales, comer verduras de proximidad para reducir la huella de carbono o adecuarse a los tiempos que nos marcan las estaciones, son decisiones importantes que tienen un impacto directo sobre la sociedad y contribuyen a su transformación.

Frente al modelo agroindustrial, Ducasse apuesta por un modelo agroecológico, «que se basa en el cuidado de aquello humano como cuidado de la naturaleza. Cero residuos, simplemente se distribuye el excedente. No se pierde nada, todo se transforma. Nada de pesticidas y máquinas». Explica que se trata de imitar a la naturaleza, y apartarse del modelo de agricultura occidental moderna que, basado en la dominación de la naturaleza, ha provocado la desertificación del 30 % de los terrenos cultivables del planeta.

Para acabar, hay que decir que el autor entiende la cocina, su campo laboral, al servicio del modelo agroecológico y

contra la industrialización de la comida, que nos condena al sobreconsumo, a la malnutrición o, en el peor de los casos, a la miseria y el hambre (que afecta a más de 3000 millones de personas en el mundo), mientras se tiran a la basura 300 millones de toneladas de comida al año. En esta línea, el autor apuesta por recuperar valores como el hecho de compartir a través de la cocina, poner en valor el producto de calidad de las diferentes cocinas de todo el mundo o la diversidad de estas cocinas

como la manera de innovar a partir del respeto a la gente y al planeta. Al fin y al cabo, con un estilo claro, directo, inteligible y que parte de la propia experiencia, Ducasse aporta una buena herramienta para repensar la cocina —y el oficio de la cocina— y todo aquello que envuelve el acto de comer en las sociedades del siglo XXI.

Jordi García
Miembro de La Repartidora y de
Caliu Espai Editorial



PALABRA DE CAMPO

Ganar cada pueblo

Alberto Cañedo

El 28 de abril tenemos una fiesta muy grande, ¡es mi cumpleaños! Y para celebrarlo, Pedro Sánchez nos ha montado unas elecciones. Perdonad la broma, porque en realidad es algo muy serio, sobre todo en esta ocasión que Martínez el Facha ya no es un personaje ficticio de los cómics, ahora la extrema derecha la tenemos en la calle y en la televisión; son de carne y hueso. Y pocas semanas después, tenemos las elecciones municipales y las autonómicas en algunos territorios. Como ya sabemos, las elecciones locales son fundamentales para todas aquellas personas que creemos en la soberanía alimentaria, en la agroecología y en un mundo rural vivo.

Dos momentos muy importantes que me parece que estamos encarando con poca ilusión, ya que oigo decir a la gente que ya no estamos en el 2015, que la fuerza del 15M ya ha desaparecido. En el 2003, un grupo de personas de mi pueblo, Carcaboso, decidimos asumir el reto político de gobernarnos por nosotras mismas, y lo conseguimos en el 2007. Yo siempre digo que estamos mucho mejor que entonces, cuando el bipartidismo estaba más fuerte que nunca. Recuerdo cuando, en esa época, iba a encuentros de ayuntamientos. Hasta llegar a la puerta, hablaba con todos los alcaldes y las alcaldesas de los

otros pueblos, pero, al entrar, quienes formaban parte del PP se iban a un lado de la sala y quienes formaban parte del PSOE al otro. Yo quedaba absolutamente solo, el independiente, y ya no me saludaba nadie durante las cinco horas que duraba el acto. Hemos de darnos cuenta de que eso ya no pasa, ahora vamos a muchos pueblos y encontramos muchas experiencias de gente organizada o gobernando sus pueblos. Somos infinitamente más gente que en el 2007.

Con ilusión renovada, sin egos, en la misma trinchera, vamos a ver si somos capaces, cuando llegue el 26 de mayo, de conseguir o renovar el gobierno de nuestros pueblos, y lo espero porque creo que tenemos una sociedad que no podemos dejar perder. Pensemos por un momento lo que significa lo público: las escuelas, la salud, las infraestructuras que tenemos... Y lo que aún podemos soñar que roben a nuestras hijas y a nuestros hijos.

Alberto Cañedo
Exalcalde de Carcaboso,
y dicen que un penado peligroso.
<https://apoyoalberto.com/web/>

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA, TE NECESITAMOS

Para pensarla y llenarla de contenidos; para darle vueltas y vueltas; para conocer y conectar nuevas experiencias; para juntar las letras, artículos y páginas; para darle forma y color; para ponerla en rutas y caminos hasta tus manos, necesitamos de tu apoyo.

Una bonita forma de colaborar es mediante una suscripción anual mínima de 32 € a cambio de la revista en papel. Además, te enviaremos de regalo un libro de **Ecologistas en Acción**. ¡Elige cuál te apetece leer!



Puedes hacer todo el proceso online a través de la web:
www.soberaniaalimentaria.info/colabora/suscripcion

Si prefieres el método clásico, haz un ingreso en la cuenta
IBAN ES59 1491 0001 2120 6168 6222 (Triodos Bank), indicando el concepto y tu nombre.
A continuación, envíanos un email con el justificante y tus datos
(no olvides la dirección, para que te pueda llegar la revista).

Para resolver cualquier duda sobre el proceso de suscripción, escribenos a
suscripciones@soberaniaalimentaria.info

¡Muchas gracias!

REGALA LA REVISTA



TE REGALO UNA SUSCRIPCIÓN A
**REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA,
BIODIVERSIDAD Y CULTURAS**
Publicación de información, debate y reflexión sobre temas
rurales bajo una óptica política de soberanía alimentaria
RECIBIRÁS EN CASA LOS PRÓXIMOS
4 NÚMEROS.
¡ESPERO QUE LA DISFRUTES!

www.soberaniaalimentaria.info/regala



OBEY OUR

2019

OBEY OBEY
OBEY OBEY
Y OBEY
OBEY
BEY
OBEY
E